



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	
----------	--	--	--

RESOLUCION N° 195

Buenos Aires, **24 JUL 2001**

VISTO :

El presente sumario en lo financiero N° 924, que tramita en Expediente N° 100.562/97, ordenado por Resolución N° 7 del 20 de Enero de 1999 (fs.2002/3) en los términos del artículo 41 de la Ley 21.526 -según texto vigente introducido por Ley 24.144- que se instruye al Banco Crédito Provincial S.A. y a diversas personas físicas en virtud de su actuación en la referida entidad financiera , originado en una inspección al Banco Crédito Provincial S.A. iniciada el 30.6.97 con fecha de estudio al 31.5.97 , de la que surgieron la existencia de diversas irregularidades, alguna de las cuales fueran oportunamente analizadas en el Sumario N° 897, que tramitara por Expediente N° 100.349/97 ; en el cual obran :

I . El Informe N° 591/741/98 (fs.1988/2001) de donde surge la existencia de diversas irregularidades que dan lugar a las imputaciones siguientes a saber:

1) Sobrevaluación del patrimonio de la entidad como consecuencia de la incorrecta clasificación de la cartera de créditos y la consiguiente insuficiencia de provisiones por riesgos de incobrabilidad, en transgresión al art. 36, primer párrafo de la Ley 21.526, Circular CONAU 1, B. Manual de Cuentas, Código 131.901 -Previsión por riesgo de incobrabilidad y 530000 -Cargo por incobrabilidad- y a la Comunicación "A" 2216, LISOL 1-84 y CONAU 1-147 y modificatorias.

2) Falta de registración contable de pasivos originados en la captación irregular de fondos de terceros, en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley 21.526, Circular CONAU 1, B. Manual de Cuentas, Código 310000 - Depósitos.

3) Incumplimiento de disposiciones sobre política de crédito, en transgresión a la Circular OPRAC -1, Capítulo I, puntos 1.6. y 1.7.

4) Registraciones contables de títulos públicos y privados depositados en custodia que no reflejaban la realidad, en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley 21.526 y a la Circular

Fórm. 3609 (1-99)

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	2427 Hoja N° 2
----------	--	-------------------

CONAU-1 B. Manual de Cuentas, Códigos 711057 -Otros valores en custodia (en pesos)-, 715053 - Valores en custodia (en moneda extranjera) y 330000 - Obligaciones diversas.

5) Incumplimiento de disposiciones sobre el régimen informativo, en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley 21.526, Circular RUNOR 1, Capítulo II, punto 1.y Circular CONAU 1, C. Régimen Informativo Mensual, punto 1. y a las Comunicaciones "A" 1706, OPRAC 1-301, Anexo, punto 1; "A" 1707, OPRAC 1-302, Anexo, punto 1; "A" 2072, OPRAC 1-352, Anexo, punto 1 y "A" 2432, REMON 1-737, Anexo, punto 1.

6) Incumplimiento de disposiciones sobre graduación del crédito y asistencia crediticia a vinculados, en transgresión a la Comunicación "A" 2140, OPRAC 1-361, punto 8 y Anexo I, punto 2.4.

7) Apertura de una filial sin autorización de este Banco Central, en transgresión al artículo 16, primer párrafo de la Ley 21.526 y a la Circular CREFI 2, Capítulo II, puntos 3 y 4.1.2.

II. La persona jurídica inculpada BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. y las personas físicas involucradas, cuyos cargos, períodos de actuación y demás datos personales y de identificación obran a fs.1944 y 1987 sub.fs. 95, 2312 sub.fs. 1/3 son: Jorge Héctor GRANITTO, Francisco Javier TRUSSO, María Elena FALABELLA, Renato DALLE NOGARE, Pablo Alfredo TRUSSO, Luciano FIORONI, Jorge Alejandro DESIMONI, Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ, Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ y Luis N. BETTI .

III. Las notificaciones cursadas, vistas conferidas, descargos presentados, instrumentos glosados que obran a fs. 2017/8, 2020/8, 2030/3, 2034 sub.fs.1/10, 2035 sub.fs.1/10, 2036 sub.fs.1/10, 2037 sub.fs. 1/7, 2042/3, 2044 sub.fs. 1/36, 2045/7, 2052 y 2058/9, 2312 sub.fs. 1/3, 2313/4, 2315 y

CONSIDERANDO:

Que como advertencia preliminar cabe destacar que tal cual se menciona en los "VISTOS" precedentes, ninguno de los hechos que motivan los cargos imputados en el presente sumario, han sido objeto de análisis ni consideración en el sumario N° 897 - Expediente N° 100349/97-, no obstante haber sido detectados por la misma inspección y superponerse en algunos casos, el período infraccional.

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 3
----------	--	-----------

I- Que previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar las imputaciones de autos, los elementos probatorios que las avalan y la ubicación temporal de los hechos que las motivan.

1. Que el cargo 1) imputa Sobrevaluación del patrimonio de la entidad como consecuencia de la incorrecta clasificación de la cartera de créditos y la consiguiente insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad y se basó en lo siguiente :

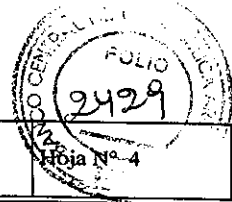
Efectuado el análisis del balance especial al 20.08.97, fecha de la suspensión de operaciones del Banco Crédito Provincial S.A. dispuesta por Resolución N° 365 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, se determinaron nuevos ajustes -adicionales a los tratados en el Expediente N° 100.349/97- que disminuyeron el patrimonio de la entidad en \$ 90.931 miles (conforme detalle que obra en Anexo de fs.117/20), resultando destacable, entre ellos, el originado por la insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad de la cartera crediticia, que alcanzó la suma de \$ 81.535 miles. La determinación de dicho importe obedeció a los siguientes conceptos:

a). Del análisis individual de los prestatarios de la cartera comercial, surgió la incorrecta clasificación de la gran mayoría de los mismos, según detalle que puede consultarse en el Anexo de fs. 122/43 donde se puntualizan las razones de cada reclasificación, arribándose a un total de incremento de provisiones de \$ 36.528 miles.

b). A su vez, como consecuencia del reprocesamiento de la cartera de consumo de la entidad en función del análisis de una muestra de prestatarios, surgió un defecto de provisiones sobre deudores de esta cartera por \$ 43.502 miles, según detalle obrante en Anexo de fs. 145/51, donde se señalan los conceptos a ajustar y los motivos de cada reclasificación.

c). También se determinó la existencia de anticipos para gastos judiciales de ambas carteras por \$ 1.505 miles, que deberían haber sido provisionados al estar incluidos en las deudas de los prestatarios clasificados en situación 3, 4 y 5.

Dentro del estudio de la cartera de consumo, cuyo monto total de provisiones en defecto era, como ya se dijo, de \$ 43.502 miles, cabe señalar que con relación a la cartera de tarjetas de crédito (\$ 12.374 miles -ver detalle de fs.145-), en la muestra analizada se detectaron prestatarios que adeudaban importes significativos y se encontraban excedidos en el límite del crédito asignado, habiendo sido declarados prácticamente en su totalidad "en situación normal", hecho que motivó que por acta del 13.10.97 (constancia de fs.153/165), se requirieran las explicaciones del caso,



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	FOLIO 2429 Hoja N° 4
----------	--	--	----------------------------

resultando relevantes los siguientes aspectos, que confirman que se mantenían activados, y sin prever créditos totalmente incobrables:


- El encargado del área "centralizadora de tarjetas de crédito", al serle requeridos los antecedentes de un grupo de usuarios incluidos en un listado que se le exhibió, declaró que su sector no tenía por función la guarda de los respectivos legajos de cada usuario, sino que ello era responsabilidad de las gerencias que dieron origen a las tarjetas correspondientes.
- El gerente de Casa Matriz declaró que dichos usuarios eran incobrables desde el punto de vista comercial, estando agotadas las gestiones para su recupero, razón por la cual solicitó su pase a legales (listado de fs. 167/70) habiendo adjuntado además, a modo de ejemplo, los resúmenes de cuenta de un prestatario (Adelaida Quarchioni) a efectos de comprobar los importes devengados (fs. 171/227).

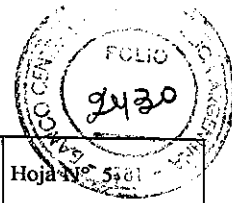
De lo expuesto surge que, sin perjuicio de los hechos tratados en el Expediente 100.349/97, en los estados contables de la entidad al 31.7.97 (primer cierre mensual anterior al balance especial al 20.8.97 confeccionado con motivo de la suspensión de operaciones), se hallaban sobrevaluados los rubros "Préstamos" y "Resultados", y por consiguiente el patrimonio del banco, habida cuenta de la insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad por \$ 81.535 miles, resultante de la incorrecta clasificación de su cartera crediticia.

El área preventora trató los hechos referidos a fs. 1969/70, punto 3.3. de autos.

1.1. Respecto de este cargo las defensas de Mario A. BACIGALUP VÉRTIZ y Mario G. BACIGALUP VÉRTIZ a fs.2034 sub.fs.1 vta./2 manifiestan que sus funciones los excluían de la administración del banco, que las irregularidades motivo del cargo fueron detectadas dentro de un período (estados contables al 31.07.97 y balance especial al 20.08.97) que no había sido objeto de auditoría por los Auditores Externos del Banco quienes necesariamente tenían competencia en ese aspecto.

Alegan que la labor específica de Consejeros de Vigilancia recién se producía, respecto de los estados contables en un informe sobre los mismos dirigidos a la asamblea anual de accionistas (art. 281 inc. "e" ley de sociedades).





B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 5481
----------	--	--------------

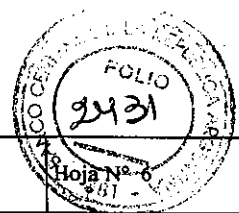
Agregan que de la declaración indagatoria de Luis GAMALLO -Gerente de Contabilidad y Control- en la Causa Penal N° 21836 surge que las registraciones contables que no se ajustaban a las normas del Banco Central eran ordenadas por Pablo Trusso.

Destacan que de las constancias del propio sumario sobre las que se quiere fundar el cargo se advierte la falta de criterios objetivos -fuera de la opinión de los funcionarios intervinientes- que sustenten la necesidad de constituir las previsiones señaladas en el cargo. Rechazan la incobrabilidad de la cartera de operaciones de tarjetas de créditos, fundándose principalmente en que el listado que luce a fs.167/70 contiene una mera enunciación de números correlacionados con nombres de personas.

1.2. La sumariada FALABELLA (fs.2035 sub.fs. 1 vta. y 2), coincide con los argumentos de los miembros del Consejo de Vigilancia ya reseñados y expresa además, que por la naturaleza de sus funciones en un órgano colegiado no podía participar en forma individual en la administración del banco y en las registraciones contables en particular.

1.3. El sumariado DESIMONI alude (fs. 2036 sub.fs. 7 vta.) en relación al cargo en análisis que, de la información recibida por los directores no accionistas según los informes de auditoría interna obrantes a fs. 594, 597, 714, 733, 756, 774, 775, 1128 a 1130 a modo de ejemplo, no surge la magnitud de los problemas observados por el BCRA. Niega haber conocido el informe de auditoría sobre previsiones del 28.10.96 al momento de su elaboración y especifica que de él se desprenden dos aspectos relevantes: 1) que del cálculo de previsiones no surgieron observaciones y 2) la imposibilidad de acceder a la información, fundando esto último en que la auditoría no pudo corroborar la cartera de consumo por falta del listado de respaldo; por lo que termina suponiendo que la entidad eliminó del activo los créditos irrecuperables. Señala que las observaciones parciales que fue haciendo el BCRA en relación a la inspección realizada sobre la cartera al 31.5.96 fueron tenidas en cuenta y constituidas las previsiones y que de los informes de auditoría y de las notificaciones parciales del Banco Central no podía imaginar la magnitud de los ajustes que se mencionan en la resolución.

1.4. El inculcado Pablo TRUSSO a fs. 2037 sub.fs. 2 / 3 expresa que el estado de los activos del BCP y las deficiencias de previsiones era conocida por el BCRA quien había influido a las autoridades de la sociedad imputada para la compra de los Bancos de Junín, Tandil y Baires, fusiones que generaron un importante impacto sobre el estado patrimonial del BCP y que al decir



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--

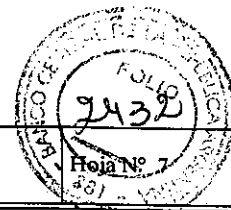
del prevenido originaron los hechos que llevaron a la suspensión. Alega haberse opuesto a la fusión y en especial a la compra del Banco de Tandil.

Indica que el Banco Central no solo conocía la situación de la ex-entidad sino que participó de los hechos que hoy se han puesto bajo su responsabilidad. También expresa que los funcionarios del ente rector nunca efectuaron observaciones que permitieran prevenir las consecuencias. Destaca que la única persona que se opuso a la fusión con el Banco de Tandil fue él, no obstante fue obligado a llevarla a cabo.

1.5. El sumariado FIORONI (fs. 2044 sub.fs.11 vta./12) manifiesta que fue tenido como parte querellante en la causa N° 21.836 caratulada "Trusso, Pablo y otros s/ asociación ilícita, estafas reiteradas, tentativa de estafa, falsificación de documentos, balance falso y autorización indebida" que tramita por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 15 del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, en la que se acreditaron una serie de hechos ilícitos cometidos por los querellados por su parte. De ello da cuenta la resolución obrante a fs. 2991/3073 de la citada causa, de fecha 24.11.97, confirmada en lo sustancial por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de La Plata el 26.12.97 (fs. 3396 y siguientes de la causa referida). Del cargo en análisis expresa (fs. 2044 sub.fs. 13 vta/14) que en el auto de procesamiento se tuvo por acreditado que al 31.5.97 se insertaron falsamente en el inventario que se presentaba a las autoridades de fiscalización del B.C.R.A. 20.804 operaciones de financiación de saldos normales (menos de 365 días de atraso) de tarjetas de crédito que integraban el activo del balance, la mayoría de las cuales no registraba deuda, según surge del resumen de la marca VISA pero sí existía esta última por un monto de \$16.344.000 en la contabilidad del B.C.P. y que, al ser advertido por el B.C.R.A. las reemplazan por 1574 operaciones con igual monto con un atraso de deuda superior a los 365 días, las que no se detallan en el inventario de saldos de tarjetas de crédito que componían el balance al 31.5.97 y que, por otra parte, y por su plazo de retraso debían ser previsionadas por pasar a ser calificadas en situación 5 (incobrables).

De esa manera, dice, queda trunca la maniobra por la que se distorsionaba el balance cerrado con fecha 31.5.97 y que tenía por objeto presentar un estado financiero irreal y que indujera engañosamente a accionistas, clientes, inversores y autoridades.

1.6. En relación a los argumentos presentados por los sumariados BACIGALUP VÉRTIZ Y FALABELLA, que fueran reseñados en los puntos 1.1 y 1.2., debe destacarse que se han circunscripto esencialmente a descartar su responsabilidad debido al tipo de función que



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--

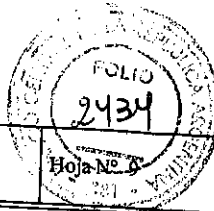
desempeñaban en la entidad y a su no participación en las decisiones cuestionadas en este sumario, argumentos que serán tratados al analizar sus responsabilidades.

En referencia a lo sostenido por las defensas de los susodichos en el sentido que la necesidad de constituir las provisiones en las que se funda el cargo en análisis no se basa en un criterio objetivo sino en la opinión subjetiva de los funcionarios intervinientes, debe destacarse que no puede ser tenido en cuenta pues los inspectores han analizado la cartera comercial existente, tal como se observa a fs. 122/43 de forma pormenorizada, pudiendo observarse que las evaluaciones de la entidad, lejos de ser razonables demostraron un palmario apartamiento de las pautas de evaluación. De las constancias apreciadas por las inspecciones surge que debió provisionarse en mayores porcentajes en base a consideraciones objetivas y razonables sobre hechos ciertos y concretos tales como la existencia de deudas vencidas e impagas, garantías insuficientes respecto de la deuda, difícil situación económica, patrimonial y financiera que padecían esos clientes, ausencia de balances, información contable desactualizada y legajos incompletos que impedían analizar la situación del deudor. Esta situación emana con claridad del análisis de los funcionarios de Superintendencia del área que previno y a tenor de lo expresado, puede afirmarse que no se basa en criterios subjetivos.

No puede dejar de señalarse que, los dichos de los encartados rechazando la incobrabilidad de la cartera originada en operaciones con tarjetas de crédito, en base al listado de fs. 167/70, del que expresan: "es una mera enunciación de números relacionados con nombres de personas de la que no surgen saldos parciales para cada uno de los nombres", resulta parcial y conlleva a incurrir en un error; en efecto, en su versión han soslayado el análisis de la muestra de deudores de la misma cartera (fs. 151 y 155) en donde se puntualiza el nombre de cada uno de ellos, el saldo de deuda, la situación en que los ubicara, el ex-banco y la correspondiente a normas según la inspección, las garantías ofrecidas, la previsión que efectuara el BCP, la que correspondía efectuar según la Superintendencia y la diferencia de ambas. Todas estas constancias prueban la incobrabilidad de la cartera de tarjetas de créditos imputada en el cargo en estudio.

Asimismo a fs. 156 /65 se encuentran agregados algunos estados de cuenta de los deudores de la entidad sumariada por el concepto referido que corroboran la muestra de deudores de la misma cartera (fs.155). A fs. 171 consta un detalle de la evolución de la deuda de la cliente de tarjeta - Sra. Adelaida Quarchioni- desde el 30.08.94 al 30.09.97. Integran también estas actuaciones -de fs. 173 a 190- copias de los resúmenes de cuenta de la citada deudora desde 30.4.93

B.C.R.A.		<div data-bbox="1276 22 1516 212" data-label="Image"></div> Referencia Expte. Nº 100.562/97 Act.
<p>a 30.9.97. Y finalmente, obran los inventarios de deudores de Carta Credencial desde el 30.8.94 al 30.9.97 (fs. 191/227).</p>		
<p>En suma, frente al cúmulo de probanzas enumeradas, corresponde no dar cabida a los argumentos expresados.</p>		
<p>1.7. De la defensa del Sr. DESIMONI se desprende que no aporta datos al efecto de desvirtuar los hechos que constituyen el cargo bajo análisis, pues en la especie el área preventiva ha efectuado correcciones en el balance de la entidad que disminuyeron su patrimonio en \$ 90.931 miles (anexo fs. 117/20), alcanzando así la insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad de la cartera crediticia la cifra de \$ 81.535 miles, de ello se da cuenta en el informe acusatorio y en los anexos de fs. 117/20.</p>		
<p>Esta significativa cifra se debió a la incorrecta clasificación de la mayoría de los prestatarios de la cartera comercial (fs. 122/43).</p>		
<p>También de la cartera de consumo surgió un defecto de \$ 43.502 miles (anexo fs. 145/51).</p>		
<p>A su vez se determinó la existencia de anticipos para gastos judiciales sobre ambas carteras por un monto de \$ 1.505 miles, que no habían sido provisionados pese a estar incluidos en las deudas de los prestatarios clasificados en situación 3, 4 y 5.</p>		
<p>Por consiguiente, sus expresiones en torno a que de los informes de auditoría no surge la magnitud de los ajustes, o que no se verificaron observaciones sobre el cálculo de provisiones, y que la auditoría no pudo acceder a la documentación de respaldo, ponen en evidencia que el examen que efectuara esta última no se adaptó a la realidad de la institución, la que se trasuntó solamente cuando la inspección efectuó las correcciones apuntadas.</p>		
<p>Su afirmación relativa a que las observaciones parciales del Banco Central fueron tenidas en cuenta, y efectuadas las correcciones se yergue en palmario reconocimiento de la conducta ilícita.</p>		
<p>1.8. Con respecto a los conceptos defensivos del inculcado Pablo Alfredo TRUSSO sintetizados en el punto 1.4. los mismos se reducen a la falacia de pretender trasladar responsabilidades propias al ente rector. Al respecto corresponde señalar que no procede endilgar responsabilidad alguna al Banco Central por el estado de los activos del BCP, la deficiencia de</p>		



B.C.R.A.

Referencia

Expte. N°

100.562/97

Act.

previsiones, la incorrecta clasificación de la cartera de créditos y la consiguiente sobrevaluación de su patrimonio, pues el rol de conducción de la entidad sumariada no le corresponde al órgano de contralor del sistema financiero, sino a las autoridades del ex-banco, entre las que se encontraba el imputado en examen. De los dichos del Sr. Trusso surge la clara pretensión de eludir responsabilidades creyendo tener derecho a excusarse e infundadamente imputar a los funcionarios del Banco Central los apartamientos normativos e irregularidades que se cometían en la propia entidad, bajo su dirección.

Incluso, audazmente pretende poner en cabeza de los responsables del organismo de fiscalización el diseño de un plan de saneamiento, obligación ésta que nace para el ex-banco por haber incumplido las disposiciones sobre liquidez y solvencia dictadas por el Banco Central, y que cae exclusivamente, por imperio del art. 34 de la Ley de Entidades Financieras en el propio banco, el que primeramente está obligado a brindar las explicaciones pertinentes a la institución que detenta el poder de contralor, para luego presentar ante ésta un plan de saneamiento.

En relación a los argumentos vertidos respecto de la compra de los Bancos de Tandil, Junín y Baires se señala que no existen en autos constancias que corroboren que el B.C.R.A. haya obligado al Banco Crédito Provincial a hacerse cargo de las entidades referidas. Tampoco obran constancias de la oposición del prevenido a la adquisición de las mismas.

De lo expuesto puede colegirse que resulta desatinado suponer, como pretende el Sr. TRUSSO, que el órgano que ha sido facultado a aplicar la Ley 21.526 y a efectuar la fiscalización y control de las entidades comprendidas en esta última y que por consiguiente ejerce la tutela de importantes intereses públicos comprometidos en el tema, asuma funciones de dirección en una entidad bajo su órbita u obligue a la compra de otras entidades. La hipótesis sustentada deviene falaz e improcedente máxime cuando el encartado permaneció al frente de su puesto de dirección y administración durante todo el período infraccional y no ha podido probar mediante instrumentos allegados a estas actuaciones, como ya se ha dicho, que se lo obligara a adquirir otras entidades financieras.

1.9. De la defensa del sumariado FIORONI, cabe destacar que su reseña no hace más que confirmar la irregularidad apuntada, sin perjuicio de su falta de participación en los hechos imputados.

1.10. En consecuencia, teniendo en cuenta las probanzas existentes en las actuaciones de las que se da cuenta en el punto 1., se tiene por acreditado el cargo 1) referido a la Sobrevaluación

2435

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 10
----------	--	------------

del patrimonio de la entidad como consecuencia de la incorrecta clasificación de la cartera de créditos y la consiguiente insuficiencia de provisiones por riesgo de incobrabilidad, en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley 21.526, a la Circular CONAU -1, B.Manual de Cuentas, Códigos 131901 - Previsión por riesgo de incobrabilidad- y 530000 -Cargo por incobrabilidad- y a la Comunicación "A" 2216, LISOL 1-84 y CONAU 1-147 y modificatorias, al 31.7.97 al haber sido determinada la situación en función del análisis del balance especial al 20.8.97 -fecha de suspensión de operaciones del Banco*Crédito Provincial S.A.-

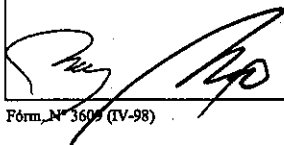
2. Que el cargo 2) imputa la Falta de registración contable de pasivos originados en la captación irregular de fondos de terceros. Surge del informe acusatorio N° 591/741-98 (fs. 1988/2001) que los funcionarios de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias actuantes en el ex- Banco Crédito Provincial tomaron conocimiento de un sumario interno efectuado a un funcionario del mismo -Sr.Panelo- que se había desempeñado como "Agente Pagador de la Banca Off-Shore" (fs. 229/31), de lo cual se infería la existencia de operaciones de captación de fondos de terceros en forma irregular.

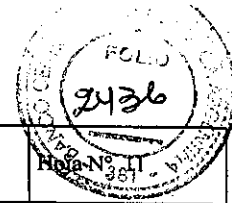
Por ello los funcionarios de la SEFYC el 6.10.97 tomaron declaración al Sr. Panelo a los efectos de que brinde mayores precisiones sobre el tema. Del acta que se le labrara al referido funcionario (fs. 233/4) surge que:

a) los ingresos y egresos de fondos vinculados con la operatoria off-shore se resumían en una planilla diaria de caja y se informaban a Montevideo por fax, remitiéndose con posterioridad los originales de tales planillas por correo privado.

b) Los fondos captados no ingresaban al tesoro del banco sino que se guardaban en una caja de seguridad o se realizaba una transferencia o se le entregaban a su requerimiento a los sres. Francisco Javier ó Pablo TRUSSO. No se elaboraban comprobantes internos del banco. A la Sucursal 25 (Buenos Aires) se remitían también fondos captados en otras sucursales. A los clientes les llegaba un talón de confirmación de las operaciones vía Uruguay a las 72 horas.

c) Las operaciones se realizaban institucionalmente desde el año 93. Existía un banco administrador en Bahamas al que se le pagaba una licencia anual (Coutts & Co.). El First Investment Bank es una sociedad extranjera en Bahamas que tenía una cuenta abierta en el banco Coutts &Co. International a la cual ocasionalmente se le remitían los fondos.





B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	
----------	--	--	--

El declarante estimó el volumen de la operatoria en aproximadamente \$ 30 millones.

Corrobora esta operatoria irregular el reclamo de la suma depositada por el inversor Sr. Mario Rafael FORICHER (fs. 236/9), exigiendo la devolución de las sumas de dinero depositadas por un total de \$ 313.900, y en el cual relata las gestiones llevadas a cabo a tal fin.

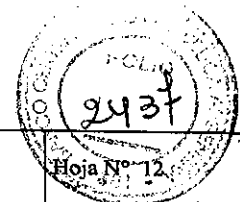
De lo expuesto surge que la entidad captó fondos de terceros en sus dependencias, utilizando su estructura administrativa, sin que tales pasivos fueran reflejados en sus estados contables (fs. 1970/1 punto 3.4.).

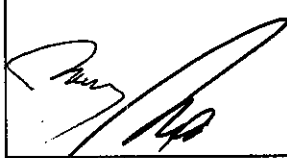
2.1. En sus defensas los sumariados Mario A. y Mario G. BACIGALUP VERTIZ y la sra. FALABELLA (fs. 2034 sub.fs. 2/vta. y 2035 sub. fs. 2 /vta.) expresan que no participaron de la operatoria descripta como cargo 2), y que además por las características de no escrita de la misma fue prácticamente de imposible detección en los circuitos administrativos del banco, así como explicable que fuera desconocida por ellos durante el tiempo que ejercieron sus funciones.

El Sr. Pablo Alfredo TRUSSO (fs. 2037 sub.fs.3/vta.) también niega su participación y manifiesta que cuando ingresó al Banco tomó conocimiento que los anteriores titulares habían puesto en marcha una operatoria para intermediar en colocación de fondos en el exterior. Por ello ordenó un dictamen de una consultora externa sobre los requisitos legales necesarios al efecto. Con dicha opinión procuró adecuar la misma y se desentendió del tema. Niega haber desempeñado funciones en la sucursal 25, donde tenían lugar los hechos que conforman el cargo, manifiesta que la declaración que surge del sumario administrativo interno, perteneciente al Sr. Panelo, es endeble ya que no se adjuntó una rectificación de la que surge que la persona que le requería el dinero era el Sr. Francisco Javier TRUSSO.

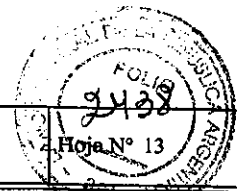
Respecto de la intención del inculcado de desvalorizar la declaración del Sr. Panelo(fs. 229/31, 233/4), basándose en una supuesta retractación de la misma, no puede validarse su alegación, pues de existir la retractación mencionada, el prevenido debería haber aportado un facsímil de ella como probanza de sus dichos, o , en el caso de no poseer copia debió haber indicado el lugar dónde presumía se podría encontrar dicho documento a los efectos de incorporarlo como prueba en estos obrados.

El imputado FIORONI relata a fs. 2044 sub.fs. 18 vta./20 la operatoria de colocación de dinero y títulos en el exterior "off shore", tal como surge de las constancias de la causa penal N°



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 12
<p>21.836 (que ya se referenciara en el punto 1.5.) y que coincide con la descripción de los hechos integrantes del cargo.</p>			
<p>2.2. Respecto de los argumentos defensivos reseñados en el punto anterior cabe destacar que ninguno tiene la envergadura suficiente para desvirtuar la existencia del cargo, pues en su mayoría se circunscriben a tratar de demostrar su carácter de extraño a la operatoria descripta.</p>			
<p>Analizando en particular la defensa del Sr. Trusso debe señalarse que no lo releva de la responsabilidad que se le asigna por el cargo 2), el hecho de haber requerido dictamen de una consultora externa, procurar adecuar la operatoria a la opinión emitida por ella y desentenderse del tema, máxime cuando ni siquiera acompaña la constancia de las conclusiones que emitiera la empresa consultada, ni copia de las instrucciones que él mismo impartiera a las dependencias del banco a los efectos de adecuación de la operatoria que se le cuestiona, ni tampoco aportó -porque evidentemente no lo poseía- constancia de la registración contable de los fondos captados. Tampoco resulta eximente que el prevenido alegue que no prestaba servicios en la sucursal 25 y que por eso no le debe alcanzar la imputación, pues como consta en autos (ver declaración del Sr. Panelo fs. 233/4) la captación de dinero se hacía en otras sucursales del Banco y si bien los fondos eran remitidos a la sucursal antedicha, cada una de las sucursales involucradas debería haber registrado contablemente las sumas así obtenidas. Como se ve el hecho de no estar alojado geográficamente en la sucursal donde se hacía el planillaje o donde se hallaba la caja de seguridad en la que se guardaba el dinero no puede resultar un argumento válido para eximirlo de responsabilidad, amén de que si el imputado prestaba servicios en la ciudad de La Plata, la distancia que lo separaba de la sucursal 25 en Buenos Aires, no resulta oponible como para justificar su condición de ajeno a los hechos que se desarrollaban en ella, máxime cuando el susodicho tenía su domicilio particular en Buenos Aires. (fs.1987 sub.fs. 95).</p>			
<p>2.3. En consecuencia, frente a los elementos probatorios glosados al sumario, los cuales no pueden ser desvirtuados por las defensas, se tiene por acreditado el cargo 2) relacionado con Falta de registración contable de pasivos originados en la captación irregular de fondos de terceros, en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley 21.526 y a la Circular CONAU-1, B Manual de Cuentas, Código 310000 - Depósitos, al 31.5.97 subsistiendo al 20.8.97 (fecha de suspensión de las operaciones de la entidad) , sin embargo de las declaraciones existentes en autos surge que la operatoria data del año 1993.</p> <p></p>			

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--



3. Que el cargo 3) Incumplimiento de disposiciones sobre política de crédito surge de los siguientes hechos :

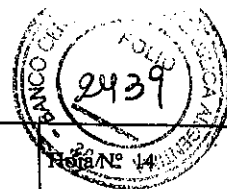
Con fecha 27.6.97 el sr. Jorge H. Granitto, en representación del B.C.P. S.A. vendió el 99% de las acciones de la firma BCP Capital Markets S.A. a la empresa Plusvi Petrol S.A., representada en el respectivo contrato por el Sr. Renato DALLE NOGARE, Vicepresidente 1° de la misma y a su vez integrante del Directorio del Banco Crédito Provincial (copia obrante a fs.241/3).

La operación se concretó por un total de \$ 1.500.000 pagaderos de la siguiente forma : la suma de \$ 400.000 en dos cuotas de \$ 200.000 cada una, con vencimientos el 1 de agosto y el 1 de setiembre de 1997 ; la suma de \$ 100.000 en una cuota con vencimiento el 1 de octubre de 1997, y el saldo de \$ 1.000.000 en 60 cuotas iguales y consecutivas, con más un interés de 8% anual, con vencimiento, del día 1 al 5 de cada mes a partir del 1.11.97.

Ante la falta de pago de las tres primeras cuotas previstas en el contrato, por un total de \$ 500.000, que se hallaban vencidas, la Intervención Judicial designada en la entidad intimó a Plusvi Petrol S.A. mediante cartas documento de fechas 7.10.97 y 13.10.97 (fs.245/6), las que fueron devueltas al remitente (fs. 1971 punto 3.5.1.).

Las circunstancias indicadas revelan que la entidad asumió riesgos sin análisis alguno sobre la situación económica y financiera del deudor, cuyo domicilio no resultó real, debiéndose tener en cuenta además el carácter de vinculado que presentaba, siendo que la normativa aplicable prescribe que "las entidades deben prestar máxima atención al análisis de los riesgos derivados de las operaciones con empresas o personas vinculadas". Mayores precisiones obran en el informe del área preventora a fs. 1971, punto 3.5.

3.1. De este cargo las defensas de los sumariados Mario G. BACIGALUP y Mario A. BACIGALUP VERTIZ a fs. 2034 sub fs.2 vta. y María Elena FALABELLA(fs.2035 sub.fs.2 vta.) señalan que no han tenido intervención en el contrato cuestionado, restan validez a la falta de pago de las cuotas y a la notificación infructuosa como elementos que contribuyan a acreditar el cargo pues estiman que de las constancias de autos no se puede inferir " una asunción de riesgos sin análisis de la situación económico financiera del deudor" (caso BCP Capital Markets S.A.); la supuesta falta de análisis -dicen- se pretende inferir de la falta de pago de las tres primeras cuotas y además agregan que el carácter de vinculada de la empresa Plusvipetrol S.A. le quita a la falta de pago el carácter indiciario de mala situación económica financiera del deudor, sobretodo cuando se produce en momentos en que ya se había configurado la crisis de la entidad. Niegan que la



B.C.R.A.	Referencia Expte. Nº 100.562/97 Act.
----------	--

correspondencia haya sido devuelta por domicilio desconocido, y dicen que aún cuando así hubiera sucedido, no implica insolvencia del deudor, ya que en el caso de efectuar un reclamo judicial la empresa quedaría notificada o intimada en el domicilio social inscripto.

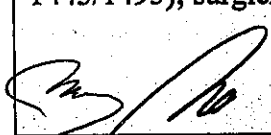
La defensa de DESIMONI se circunscribe a expresar que está exento de participación por acción u omisión (fs. 2036 sub.fs.8 vta.). La defensa del Sr. Pablo Alfredo TRUSSO niega haber participado en la operación y expresa que tampoco está prohibido hacer negocios con empresas vinculadas al banco, y que de los antecedentes de la empresa compradora se infería que no existía un riesgo mayor al normal (fs.2037 sub.fs.4).

3.2. Cabe advertir la superficialidad de los argumentos defensivos reseñados en el punto anterior, toda vez que a tenor de las evidencias existentes en las actuaciones la notificación cursada a la empresa a los efectos de intimar el cumplimiento del contrato, fracasó, (fs.245/6); además de ello, la compradora no cumplió con los pagos a los que se había comprometido. Si la compradora hubiera tenido intención de cumplir con los pagos a los que se había comprometido y no hubiera querido efectivizarlos a la intervención destacada en el ex-banco, podría haber consignado judicialmente los importes de las cuotas adeudadas, con lo que no cabría dudas sobre su voluntad de cumplimiento del contrato.

Evidentemente, lo que se trasluce de su comportamiento elusivo es que PLUSVIPETROL S.A. no estaba en condiciones de afrontar las obligaciones asumidas, lo que denota que el ex-banco actuó con cierta lenidad al contratar, dejando de lado la normativa que prescribe que "las entidades deben prestar máxima atención al análisis de los riesgos derivados de las operaciones con empresas o personas vinculadas".

3.3. En consecuencia, se tiene por acreditado el cargo 3) con respecto al Incumplimiento de disposiciones sobre política de crédito en transgresión a la Circular OPRAC -1, Capítulo I , puntos 1.6 y 1.7 al 27.6.97.

4. Que el cargo 4) referido a Registros contables de títulos públicos y privados depositados en custodia que no reflejaban la realidad se produce a través de los siguientes hechos configurantes: con fecha 10.11.97 se labró un acta a quien se desempeñaba como responsable de la oficina de Títulos desde el año 1994 (constancia de la misma y documentación aportada a fs. 1443/1495), surgiendo de sus declaraciones la existencia de una serie de anomalías que implicaban



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 15 7490
----------	--	--	--------------------

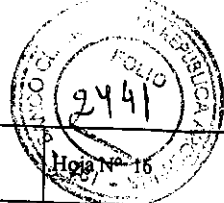
que las respectivas registraciones contables representativas de los títulos públicos y privados depositados en custodia por terceros en la entidad no reflejaban la realidad.

Así, surgió la existencia de graves problemas de organización de dicha oficina de Títulos, lo cual oportunamente acarrió la instrucción de un "Sumario por presuntas infracciones a las normas vigentes" dispuesto por el MAE (Mercado Abierto Electrónico) mediante Resolución N° 17 del 22.11.94.

Los mencionados problemas de organización impedían cuantificar integralmente el eventual pasivo oculto derivado de la operatoria de títulos públicos y privados a raíz de los reclamos de terceros depositantes, habiéndose implementado un sistema de atención individual de los reclamantes quienes debían aportar la documentación que acreditara la titularidad de los valores (fs. 1457/62).

De las declaraciones efectuadas por el responsable del área de Títulos a fs. 1446/1451, demostrativas de las irregularidades ocurridas, pueden extraerse a título ejemplificativo las siguientes:

- "detecté que no existían concurrencias de ninguna base de los saldos adm. comparados con las tenencias en caja de valores" (fs.1448).
- "Es evidente que existe un faltante no pudiendo cuantificarlo..." (fs.1448).
- "Durante el período diciembre 1994 y 20 de abril de 1995 a falta de soporte administrativo se incrementaron las diferencias ya existentes" (fs.1449).
- "...no permite establecer fehacientemente la pertenencia de los títulos que el Banco no tiene en este momento, ni recuperar los mismos, ni tampoco establecer el destino de estos, ni conciliar el saldo de la caja de valores con la tenencia del BCP". (fs.1449)
- "...trámites a realizar de quienes reclamen en base a tenencia de títulos valores, inexistentes en los registros corrientes del Banco". (fs.1449)
- "OCTAVA: Para que diga si existe deuda del BCP a los tenedores de títulos y acciones y por qué monto sería? RESPUESTA: Que sí. A partir de mi gestión en función del ajuste técnico de la deuda (traspaso de la cuenta 1140 y 764), de la gente que se ha presentado conforme a la norma



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act. Hojas N° 16
<p>de reclamos aproximadamente de U\$S 600.000 quedando pendiente algún ajuste de alta o baja que por razones de tiempo no se pudo realizar. Existen otros U\$S 4.100.000 aproximadamente, que corresponden a presuntos tenedores que podrían eventualmente reclamar que surgen de la equivalencia de sumas iguales por comparación de saldos (entre caja Banco)...” (fs.1450 “in fine”/1451).</p>		
<p>Por lo expuesto puede afirmarse que los saldos registrados en Cuentas de Orden representativos de las tenencias de títulos en custodia por cuenta de terceros no reflejaban la realidad ya que no pudieron conciliarse las cuentas respectivas, no evidenciando los estados contables los pasivos ocultos derivados de los títulos depositados por terceros, no reclamados aún por sus titulares, pero que no se hallaban en existencia en la entidad (ver sobre el particular la nota de fecha 16.9.97 suscripta por el declarante (fs.1445), de donde surgen las cifras estimadas de los faltantes).</p>		
<p>Mayores precisiones pueden extraerse de las declaraciones efectuadas por el responsable del área de Títulos a fs. 1446/1451.</p>		
<p>Los hechos descriptos fueron relatados por el área preventora a fs. 1972 punto 3.7.</p>		
<p>4.1. Que las defensas de los sumariados Mario A. y Mario G. BACIGALUP VERTIZ (fs. 2034 sub.fs. 3/4) y de la señora FALABELLA (fs. 2035 subfs. 2 vta.3 / vta./ 4) manifiestan que tuvieron conocimiento del sumario que iniciara el MAE mediante Resolución N° 17 del 22.11.94 por problemas de organización en la oficina de Títulos del banco, pero niegan que haya tenido como resultado la determinación de la existencia de pasivos ocultos en el BCP.</p>		
<p>La defensa del Sr. DESIMONI (fs. 2036 sub.fs. 8 vta. y 9) expresa que el BCRA toma como cierta la declaración del Sr. Antonio Fernández, responsable del sector de títulos quien sugiere la existencia de un faltante de láminas. Dice que según consta en el acta de reunión de directorio del 28.11.96 el Mercado Abierto Electrónico eleva su dictamen sin observaciones del sector títulos y que cuando se le pregunta a Fernández a fs. 1449 quienes estaban informados de esta operatoria, no lo menciona ni directa ni indirectamente.</p>		
<p>Los conceptos defensivos del Sr. Pablo TRUSSO (fs.2037 sub.fs.4 y vta.) se circunscriben a delimitar la responsabilidad que le cupo en los hechos que conforman el cargo pero en ningún momento niega que ellos se hayan producido.</p>		

B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	2492 Hoja N° 17
<p>4.2. Que los argumentos reseñados en el punto precedente no logran desvirtuar la configuración de la infracción, pues la existencia de los faltantes de títulos no sólo surge de la declaración del responsable del sector, sino también de los siguientes instrumentos glosados a estas actuaciones : 1) los reclamos de los terceros depositantes de títulos de los que se da cuenta en la declaración anterior, 2) el programa de normalización de la oficina de títulos, 3) el instructivo de organización y métodos de la propia ex-entidad para atender a los reclamantes y 4) la implementación de mejoras funcionales y tecnológicas (fs. 1443/1451, 1452/6, 1457/62, 1463/91, respectivamente).</p> <p>En cuanto a la expresión del Sr. Desimoni respecto de que el Mercado Abierto Electrónico eleva su dictamen sin observaciones, es de destacar que el mismo se circunscribe solamente a la inspección realizada en el sector títulos de la entidad los días 21 y 23.10.96. (fs.2261) El Sr. Desimoni elude mencionar las conclusiones de los distintos sumarios instruidos por el Mercado Abierto Electrónico (entre otras fs.2076,2080)</p> <p>4.3. Que, en consecuencia corresponde tener por acreditado los hechos configurantes del cargo 4) Registros contables de títulos públicos y privados depositados en custodia que no reflejaban la realidad, en transgresión al artículo 36 primer párrafo de la Ley N° 21.526 y a la Circular CONAU - 1, B. Manual de Cuentas, Códigos 711057 -Otros valores en custodia (en pesos) -, 715053 - Valores en custodia (en moneda extranjera) y 330000-Obligaciones diversas. Los hechos descriptos fueron evidenciados durante la inspección con estudio al 31.5.97 subsistiendo a la fecha de suspensión de operaciones de la entidad (20.8.97), debiendo meritarse que el inicio de las irregularidades dataría -según las declaraciones referidas- de los años 1993 y 1994.</p> <p>5. Que el cargo 5) imputa el Incumplimiento de disposiciones sobre el régimen informativo. Según surge del informe acusatorio de fs. 1988/1999 consta en el Informe N° 583/1739/97 del Area de Análisis y Seguimiento (fs. 1963, sub.fs. 1, punto 2.1.), que en reiteradas oportunidades durante el año 1997 el ex banco incurrió en atrasos significativos en la remisión del régimen informativo, aspecto que también fue puntualizado por dicha área en el punto III de su Informe N° 583/1659/97 (ver fs. 1538/1553).</p> <p>Las informaciones cuyo atraso fue verificado correspondientes al primer semestre del año 1997 son las siguientes : fórmula 3926, fórmula 4026, fórmula 4212, Capitales mínimos, Requisitos mínimos de liquidez, Financiamiento del sector público, Código 42 y Código 43 (el detalle</p>			

B.C.R.A.	Referencia Expte. Nº 100.562/97 Act.
----------	--

pormenorizado de los atrasos incurridos respecto de cada información surge del cuadro de fs. 1963, sub.fs.4 "Banco Crédito Provincial S.A. - atrasos incurridos en la presentación del régimen informativo".

Asimismo en el citado informe N° 583/1739/97 (fs. 1963 sub.fs.1, punto 2.2.) se deja constancia que "...la entidad no ha dado cumplimiento a la presentación del régimen informativo desde julio/97. Tampoco presentó la información trimestral al 30.6.97".

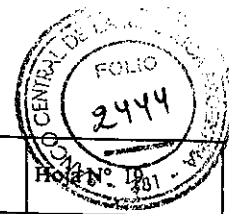
Del cuadro de fs. 1963, sub.fs. 5 ("Banco Crédito provincial -Régimen informativo pendiente de ingreso al 30.9.97"), surge el detalle pormenorizado de las informaciones que la entidad no remitió.

Los hechos descriptos fueron relatados por el área preventora a fs. 1972/3 de las presentes actuaciones, puntos 3.6. y 3.7.

5.1. Referente al cargo en análisis, las defensas de Mario A. y Mario G. BACIGALUP VERTIZ y FALABELLA obrantes a fs. 2034 sub.fs. 4 /vta. y 2035 sub.fs.4, respectivamente, señalan que no tuvieron responsabilidad en los atrasos en la presentación de las fórmulas, que no les consta que el BCRA haya reclamado la presentación de las fórmulas mediante las notas de fs. 1507/1513 ni por cualquier otro medio, como así también que en el caso de haberlo hecho el responsable de la administración del ex-banco lo haya comunicado al Directorio, que tal reclamo no consta en el libro de Actas de Directorio. En relación a la falta de presentación del balance de cierre de ejercicio cumplido al 30.6.97, expresan que dada la fecha de intervención de la entidad y la fecha de presentación en años anteriores, no observan anormalidad alguna. Luego expresan que de las declaraciones del responsable del sector administrativo en la causa penal N° 21.836 surge que los incumplimientos a la normativa del BCRA en esa área era responsabilidad de los directores ejecutivos del banco.

La defensa del Sr. DESIMONI a fs. 2036 sub.fs.9 se limita a deslindar su responsabilidad indicando que los directores no accionistas no estaban informados de los atrasos en la presentación de las fórmulas. La defensa del Sr. Pablo A. TRUSSO (fs.2037 sub.fs.5), en lo atinente al presente cargo gira en torno a justificar el atraso por la implementación de un complejo sistema de informatización del ex-banco que comenzaba a instalarse.

5.2. En relación a los argumentos defensivos reseñados cabe señalar que ninguno de ellos tiene la suficiente entidad como para desvirtuar las constancias de autos en torno a los atrasos en la



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	
----------	--	--	--


presentación de las fórmulas que hacen al incumplimiento del régimen informativo. A mayor abundamiento procede especificar que el hecho de que la entidad siempre haya presentado sus fórmulas con atraso, o que los directores no estén informados del incumplimiento, o que los funcionarios que estaban encargados de la tarea no la realizaran en término no releva a los directores del contralor del personal técnico y de su accionar, tanto por estar facultados para promover los controles de la actividad cuanto para ejercer una razonable verificación del legal funcionamiento de la misma, -lo que hace a su faz técnica- y el haber declinado u omitido esas obligaciones que les competían les hace incurrir en responsabilidad por las irregularidades e infracciones a las normas financieras que específicamente regulaban la actividad de la entidad. En sentido similar surge la responsabilidad de los miembros del Consejo de Vigilancia respecto de la fiscalización de la gestión del directorio, pues no surge de estas actuaciones que hayan verificado que el directorio cumpliera con las disposiciones del régimen informativo en legal tiempo y forma.

5.3. En consecuencia, cabe tener por acreditado el cargo 5) relacionado con el Incumplimiento de disposiciones del régimen informativo en transgresión al artículo 36, primer párrafo de la Ley 21.526 ; a la Circular RUNOR 1, Capítulo II, punto 1.; a la Circular CONAU -1, C. Régimen Informativo Mensual, punto 1; y a las Comunicaciones "A" 1706, OPRAC 1-301, Anexo, punto 1 ; "A" 1707, OPRAC 1-302, Anexo, punto 1; "A" 2072, OPRAC 1-352, Anexo, punto 1 y "A" 2432, REMON 1- 737, Anexo, punto 1, entre enero de 1997 y agosto del mismo año.

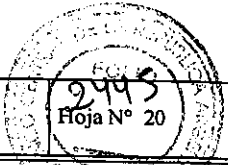
6. Que el cargo 6) imputa el Incumplimiento de disposiciones sobre graduación del crédito y asistencia crediticia a vinculados y ha sido descripto en el Informe N° 591/741-98(fs.1988/99).

Surge de la mencionada pieza acusatoria que el ex-Banco Crédito Provincial S.A. incurrió en excesos frente a los límites fijados normativamente en materia de graduación del crédito, es decir teniendo en cuenta el patrimonio neto de los prestatarios.

Concretamente, la inspección con fecha de estudio al 30.6.94 determinó excesos en esta relación en el caso de los deudores LUXHOGAR S.A. (de marzo a julio de 1994) y PIEDRAS SAN LUIS S.A. (de diciembre /93 a junio /96).



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--	--



Como expreso reconocimiento de la infracción obra a fs. 1963 sub.fs.46/7 nota de fecha 12.11.97 dirigida al Interventor Judicial, suscripta por el Gerente de Control de Riesgo de la ex-entidad.

A su vez a fs. 1963 sub.fs. 48/52 y 54 consta el desagregado de los excesos indicados con el cálculo de los cargos respectivos, constituyendo los papeles de trabajo utilizados en la determinación, que también cuentan con la firma del funcionario referido.

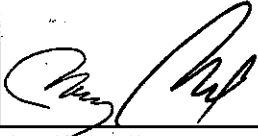
La inspección actuante también determinó excesos al límite fijado para el total de la asistencia crediticia a personas y empresas vinculadas (Comunicación "A" 2140, Anexo I, punto 2.4.), correspondientes a los meses de abril y mayo 95 y agosto y setiembre /95, situación que también queda acreditada con la nota del 12.11.97 de fs. 1963 sub.fs. 46, obrando en la subfoja 53 papel de trabajo de donde surge el cálculo de los cargos respectivos.

En cuanto a la firma BCP Capital Markets S.A., la participación en la misma que detentaba la entidad, considerando que no era una sociedad cuyo objeto fuera la prestación de servicios complementarios, incumplió el límite del 12,5% del patrimonio del deudor (Com. "A" 2140, punto 8) desde mayo /96 hasta junio /97, conforme puede apreciarse en el cuadro de fs. 1963, subfs. 56, de donde surgen los excesos por mes y el cálculo de los cargos devengados actualizados a noviembre /97.

Situación similar se registró respecto de la firma Pirámide de Mayo S.A. por los meses mayo y junio de 1996, según puede apreciarse a fs.1963, sub.fs. 57.

Asimismo la inspección con fecha de estudio al 31.5.96 determinó excesos en esta relación en los casos de: Papelera San Jorge S.A., Juan Chiesa, Ivo Antoniazzi, Antoniazzi - Chiappe S.A., Andor S.A. , El Tambillo S.A., Ricardo César Urien, Empresa Constructora Noroeste S.A., Granja La Licina S.A. y Bayco S.A. según el detalle de fs.1963 sub.fs.72 y actualización de cargos a sub.fs. 73, obrando a sub.fs. 58/71 listados con la evolución de las respectivas deudas. Los patrimonios de los deudores tenidos en cuenta surgen de los balances y manifestaciones de bienes obrantes a fs. 1963 sub.fs.74/169.

A fs. 1963 sub.fs.45 consta detalle de los cargos determinados por los excesos referidos en los párrafos anteriores.



2446

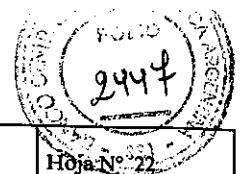
B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 21
----------	--	------------

Los hechos descriptos fueron relatados por el área preventora a fs. 1974/5 de las presentes actuaciones punto 3.10.2.

6.1. Las defensas de los sres. Mario A. y Mario G. BACIGALUP VÉRTIZ (fs.2034 sub.fs.4 vta./5) y de la Sra. María Elena FALABELLA (fs. 2035 sub.fs.4 vta./5) son coincidentes en manifestar que los excesos que configuran el cargo fueron determinados por las inspecciones con fecha de estudio al 30.6.94 y 31.5.96 sin que se le notificara a la entidad en forma inmediata que hayan dado lugar a faltas disciplinarias, por lo que concluyen que han sido consentidos por el Banco Central . Asimismo expresan que tampoco es posible considerar como una falta independiente la falta de pago de los cargos correspondientes por los excesos mencionados, pues alegan que esos cargos no eran exigibles ya que el ex-banco planteó discrepancias de criterio sobre los mismos. Niegan validez a la nota de reconocimiento suscripta por un funcionario de línea del ex-banco, por ser posterior a la fecha de desvinculación de los imputados (fs.1963 sub.fs.47/7), y también niegan su intervención en los hechos que dieron motivo a la aplicación de tales cargos.

El prevenido Pablo Alfredo TRUSSO a fs. 2037 sub.fs.5 /vta.manifiesta que en su rol de Director e integrante del Comité de Créditos nunca impartió directivas destinadas a incumplir el régimen de asistencia crediticia a empresas vinculadas y no vinculadas. Expresa que mantuvo su convicción que el BCP lograría su saneamiento con la aplicación de políticas férreas a punto tal que ordenó ejecutar judicialmente el 15% de la cartera de deudores morosos. Destaca que resulta necesario para ejercer el derecho de defensa que se fundamente con claridad los motivos por los cuales se considera a la empresa BCP Capital Markets S.A. como no complementaria, pues -dice- el BCP realizaba actividades en común con la mencionada empresa, razón suficiente para sostener la condición de complementaria de acuerdo a lo indicado en la Comunicación "A" 2140, circunstancia que modifica la relación de exceso crediticio que se le imputa. Expresa que no tuvo incidencia particular en cuanto a los recaudos adoptados respecto de las restantes empresas cuyos excesos se imputan. Desconoce cualquier relación personal con directivos de esas empresas. Manifiesta que en el caso de Papelera San Jorge S.A., El Tambillo S.A. y Empresa Constructora Noroeste S.A. los respectivos créditos habían sido otorgados por los bancos que con posterioridad fueron adquiridos por el BCP.

6.2. Respecto de los argumentos defensivos de ambos sumariados BACIGALUP VÉRTIZ y de la Sra. FALABELLA cabe señalar que la conducta del Banco Central no significa como ellos sostienen "un consentimiento de la anomalía". Ello por cuanto la determinación de los excesos en análisis dio lugar a la imputación que se reprocha en el presente sumario, y fue motivo de



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 22
----------	--	------------

anteriores señalamientos por las inspecciones destacadas en la entidad e incluso de la aplicación de cargos .

Los excesos referidos fueron detectados por la inspección que circunscribiera su estudio al 30.6.94 , las observaciones se comunicaron por nota 531/424/95 de fecha 22.8.95 (fs.1728), la entidad respondió mediante nota del 28.9.95 (fs. 1726/7) y el sector interviniente no la consideró satisfactoria según análisis volcado en Informe N° 531/292/95 (fs.1729/31 y 1735/7).

Posteriormente, la inspección con estudio al 31.5.96 se vio obligada a reiterar las observaciones de su antecesora, pues los excesos apuntados no se habían corregido. Prueba de ello es el Memorando de Inspección N° 10, del 20.8.96 (fs.1781).

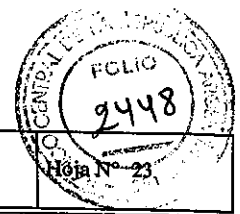
La cumplimentación de lo exigido en el anterior instrumento fue expresado por el BCP en nota del 11.9.96 (fs. 1749/52) de cuyo análisis por la Dependencia Técnica interviniente se determinó que no agregaba nuevos elementos que pudieran fundamentar una opinión distinta de la sustentada oportunamente (fs. 1801/2).

Además, relativo a los recursos que planteara el ex-BCP, el Superintendente de Entidades Financieras y Bancarias concluyó rechazando el recurso jerárquico que lleva en subsidio el de reconsideración. También se rechazó la denuncia de ilegitimidad y se ratificaron las intimaciones para ingresar los cargos adeudados por los períodos no prescriptos, todo ello emergente de los excesos verificados en las relaciones señaladas. (fs. 1963 sub.fs. 182).

De todo lo expuesto da cuenta la Resolución N° 521 del 31.10.97 del Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias cuya copia obra a fs. 1801/ 3.

En conclusión, la actividad realizada por el Banco Central que ha sido referida en los párrafos precedentes, dista de ser un consentimiento de la anomalía como pretenden los sumariados Mario Alberto y Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ y María Elena FALABELLA.

En relación a las consideraciones sobre la falta de pago de los cargos correspondientes, procede indicar que ellos se imponen con motivo de los excesos en las relaciones técnicas y nada tienen que ver con la presente imputación sumarial ni con las eventuales sanciones disciplinarias que en su consecuencia pudieran resultar aplicadas, toda vez que ellos apuntan a otras consecuencias. Con referencia a ello se destaca que la Jurisprudencia ha tenido oportunidad de expedirse sobre este particular : "...Que los cargos no requieren para su aplicación de un



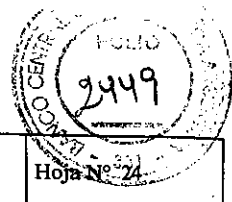
B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--

sumario previo, con audiencia y procedimiento preestablecido. Ellos reposan sobre cálculos numéricos emanados de los datos que deben suministrar las entidades financieras para el contralor del Banco Central. Es decir, en suma, que surgen directa y aritméticamente y son de aplicación automática por la sola circunstancia de incumplimientos de mecanismos técnico-bancarios. Dicha modalidad se adecua al logro de la regulación del crédito y los medios de pago, tarea que compete al organismo de aplicación, en tanto concurre a obtener una determinada conducta operativa de las entidades del sistema. No cabe pues, asimilar el régimen de las sanciones con el de los cargos del artículo 35 de la Ley 21.526, que si alguna semejanza tienen con la sanción de multa, no participan de su misma naturaleza disciplinaria, ni son aplicados con este carácter". (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala Contencioso Administrativo N° 3, Autos "La Agrícola Cía. Financiera S.a. c/Banco Central s/apelación - Causa L - 980, sentencia del 12.8.80).

Tampoco puede restársele autenticidad a la documentación de fs. 1963 sub.fs.46/7 por el mero hecho de haber sido suscripta por un funcionario de línea de la ex-entidad con posterioridad a la desvinculación de los imputados.

Con referencia a las consideraciones vertidas por el sumariado TRUSSO respecto del saneamiento de la entidad mediante la aplicación de políticas férreas verbigracia la ejecución judicial del 15% de los deudores morosos, cabe señalar que el correctivo indicado no guarda relación alguna con el cargo bajo análisis, pues el exceso que se penaliza no se configura cuando se ejecuta al deudor, sino al momento de constituir la participación accionaria u otorgar el crédito. En cuanto a la imputación del exceso de BCP Capital Markets S.A. no puede considerarse -como expresa el sumariado TRUSSO (fs.2037 sub.fs.5)- a la citada empresa como complementaria atento que el imputado no acreditó fehacientemente el objeto social de la misma, circunscribiéndose sólo a expresar que esta realizaba servicios de asesoramiento financiero, sin acompañar documentación que avale sus dichos (contrato social o estatutos) ni ofrecer medida probatoria alguna para avalar sus expresiones. En referencia a que no tuvo incidencia particular en cuanto a los recaudos adoptados respecto de las restantes empresas cuyos excesos se imputan debe señalarse que son consideraciones que hacen a su responsabilidad personal pero que en nada obstan a la existencia del presente cargo.

En referencia a las consideraciones sobre los excesos de Papelera San Jorge S.A., El Tambillo S.A., y Empresa Constructora Noroeste S.A. vertidas por el Sr. TRUSSO debe señalarse que pretender restarle validez al cargo solamente por considerar que el exceso en la graduación



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 24
----------	--	------------

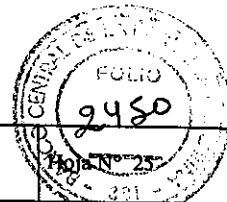
crediticia a 3 empresas no sería responsabilidad del BCP sino de los Bancos que éste adquirió, no resulta idóneo para anular la configuración del cargo en examen, toda vez que el mismo se halla integrado por otros excesos de los que se da cuenta a fs. 1974/5.

6. 3. Que en consecuencia cabe tener por acreditado el cargo 6) referido al Incumplimiento de disposiciones sobre graduación del crédito y asistencia crediticia a vinculados en transgresión a la Comunicación "A" 2140, OPRAC*1-361, punto 8 y Anexo I, punto 2.4. El período infraccional abarca desde diciembre de 1993 a junio de 1997, de acuerdo al siguiente detalle:

- El exceso de Luxhogar S.A se verificó entre marzo y julio/94.
- El exceso de Piedras San Luis S.A. entre diciembre/93 hasta junio/96.
- El exceso en el total de asistencia a vinculados se verificó en abril y mayo/95 y en agosto y setiembre/95.
- El exceso de Pirámide de Mayo S.A. se verificó en mayo y junio/96.
- Los excesos de los prestatarios mencionados en el anteuúltimo párrafo de la descripción de los hechos fueron verificados al 31.5.96.

7. Que el Cargo 7) Apertura de una filial sin autorización del Banco Central ha sido descripto en el Informe acusatorio N° 591/741-98 (fs.1988/99). Surge del documento antedicho que el 7.8.97 el Ex- Banco Crédito Provincial S.A. procedió a la apertura de la Sucursal N° 20 -Ringuelet- ubicada en Av. Centenario 1876 (Wall Mart) sin contar con la previa autorización del Banco Central de la República Argentina. (fs.1854).

A fs. 1857 obra constancia del telegrama remitido con fecha 11.8.97 por esta Institución al Banco Crédito Provincial S.A. donde se le comunicaba que hasta nuevo aviso debería abstenerse de habilitar dicha filial, debiendo previamente acreditar el cumplimiento de las medidas de seguridad normativamente establecidas con intervención del órgano policial competente. Ello le fue ratificado mediante nota de fecha 15.8.97, donde se le reiteraba que debía abstenerse de habilitar la filial hasta tanto este Banco Central expresamente lo autorizara.



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--	--

No obstante las advertencias la sucursal Ringuelet comenzó a funcionar. Prueba de ello son los movimientos de caja de la misma del 1.8.97, que obran a fs.1861/72.

Los hechos descriptos fueron relatados por el área preventora a fs. 1975/6 de las presentes actuaciones, punto 3.12.

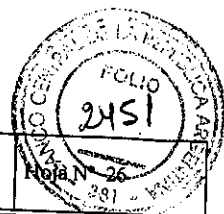
7.1. Los descargos de los sumariados Mario A. y Mario G. BACIGALUP VÉRTIZ (fs. 2034 sub.fs. 5) y de la Sra. María Elena FALABELLA (fs.2035 sub.fs.4 vta./5) señalan que la apertura de la sucursal no fue motivo de tratamiento en las reuniones de directorio de la entidad de las que hayan participado. Indican que desconocen quien dio la orden y quien la ejecutó y afirman que no han tenido participación en la apertura de la sucursal referida, por estar ya alejados de la institución. Desconocen qué funcionarios firmaron la fórm. 2522 (fs.1858). El sumariado Pablo Trusso a fs. 2037 sub.fs. 6 expresa que no prestó su consentimiento para la apertura de la sucursal mencionada y que informó a sus subalternos que sólo se podían abrir sucursales con la debida autorización del órgano de control. Además de puntualizar que al momento de la ocurrencia del hecho, la institución sufría problemas financieros, los veedores del Banco Central estaban designados, y la importancia y seriedad de los temas que debía tratar impedía que hechos como el imputado en este cargo llegara a su conocimiento.

El señor DESIMONI (fs. 2036 sub.fs.9) señala que la intimación del Banco Central se produce un día antes de su retiro y la ratificación tuvo lugar tres días después de su renuncia, con lo que careció de toda posibilidad de actuar o evitar conducta alguna al respecto.

7.2. En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que los argumentos vertidos solo se basan en la descripción de situaciones personales que hacen a la participación de los prevenidos que serán tratadas más adelante, cabe concluir teniendo por acreditado el cargo 7) Apertura de una filial sin autorización del Banco Central en transgresión al artículo 16, primer párrafo de la Ley 21.526 y a la Circular CREFI 2, Capítulo II, puntos 3 y 4.1.2. entre el 7.8.97 y el 20.8.97.

8. Que habiéndose analizado los hechos configurantes de los distintos cargos se han tenido por probados los mismos; consecuentemente, cabe efectuar la atribución de responsabilidades a cada una de las personas sumariadas.

II. Ex- BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A.



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--

9. Que a la entidad financiera del epígrafe se le imputa la ocurrencia de los hechos configurantes de los cargos 1 a 7 (fs. 1988/99).

9.1. Que cursada la notificación de la apertura del sumario al Sr. Jorge Héctor GRANITTO en su carácter de Vicepresidente 1° (fs 2004, 2009) por haber estado a cargo de la Presidencia debido al fallecimiento del Presidente del ex-banco y, atento su resultado negativo (fs.2039 y 2049), se le efectuó una nueva notificación por medio de la publicación de edicto en el Boletín Oficial (fs.2053), sin que haya tomado vista de las actuaciones, ni presentado descargo, por la persona jurídica.

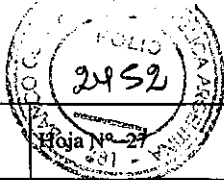
Debido a ello la situación del Ex-BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A con relación a las imputaciones que se le efectúan en el sumario será analizada en base a las constancias acumuladas en el expediente, sin que su inactividad importe presunción en su contra.

9.2. Los hechos analizados en el considerando I que han dado lugar a las imputaciones del presente sumario, tuvieron lugar en el ex-Banco sumariado siendo producto de la acción u omisión de sus órganos representativos. Así, habida cuenta que la persona jurídica puede sólo actuar a través de los órganos que la representan, ya que, dentro de los entes ideales, no puede haber otra voluntad que la expresada por las personas físicas que tienen facultades estatutarias para actuar en su nombre (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sentencia del 16.10.84, causa 2128, autos "Bolsa de Comercio de San Juan c/Bco. Central s/Resolución 214/81"), debe concluirse que esos hechos le son atribuibles y que generan su responsabilidad en cuanto contravienen las normas reglamentarias de la actividad financiera dictadas por este Banco Central dentro de sus facultades legales.

9.3. Que en consecuencia, hallándose probados los cargos 1) a 7) en el considerando I, corresponde atribuir responsabilidad al ex-BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A. por las infracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 reprochadas en estas actuaciones.

III. Jorge Héctor GRANITTO (Vicepresidente 1ero. 18.12.79 - 20.08.97) - Francisco Javier TRUSSO (Vicepresidente 2do. 5.8.87 - 20.08.97)-Renato DALLE NOGARE (Prosecretario 5.8.87 - 20.08.97 - ver fs. 2312 sub.fs.1/3-)

10. Que es procedente verificar la eventual responsabilidad de los sumariados mencionados en el epígrafe por las imputaciones 1) a 7) formuladas en el presente sumario (fs.1988/99).

B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	
<p>10.1. Que cursada la notificación de apertura del sumario al prevenido GRANITTO (fs.2039 y 2049) y atento su resultado negativo se dispuso una nueva notificación mediante la publicación de Edicto en el Boletín Oficial (fs.2053), sin que el prevenido haya tomado vista de las actuaciones ni comparecido a estar a derecho.</p> <p>Que respecto de los sres. Francisco Javier TRUSSO y Renato DALLE NOGARE, a fs. 2005 obra copia de la contestación al oficio que oportunamente se librara en el Sumario N° 897, Expediente N° 100.349/97 caratulado "Banco Crédito Provincial S.A." del Juzgado de Transición N° 2 del Departamento Judicial de La Plata que confirma que los prevenidos se hallaban prófugos.</p> <p>Por lo expuesto "ut-supra" se efectuó una nueva notificación por edicto en el Boletín Oficial (fs.2028) sin que los incoados hayan tomado vista de las actuaciones ni presentado defensa (fs.2055).</p> <p>Con posterioridad a los hechos narrados en los párrafos precedentes, el Sr. Renato DALLE NOGARE fue detenido en España y extraditado por orden de la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Transición N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, Dra. Marcela Inés GARMENDIA , a quien se le solicitara autorización para proceder a notificarlo del presente sumario en su lugar de detención (fs.2058), diligencia que fuera cumplida según acta de fs. 2059, sin que compareciera a estar a derecho.</p> <p>No obstante ello, la conducta de los incausados será evaluada a la luz de los elementos de juicio obrantes en las actuaciones y sin que su inacción procesal constituya presunción en su contra.</p> <p>10.2. Que la situación de los sumariados será tratada en forma conjunta en razón de haber desempeñado roles directivos durante el mismo período infraccional, sin perjuicio de señalarse las diferencias que presenta cada caso.</p> <p>10.3. En orden a la determinación de las responsabilidades que les caben a las personas sumariadas por su función directiva, se impone destacar que es la conducta de los prevenidos la que, en rigor, generó la transgresión a la normativa aplicable en materia financiera, ocasionando la atribución de la responsabilidad a la persona jurídica y, además, mereciendo ellos personalmente reproche en virtud de haberse desempeñado incorrectamente como integrantes de su órgano de</p> <div data-bbox="215 1960 486 2072"></div>			

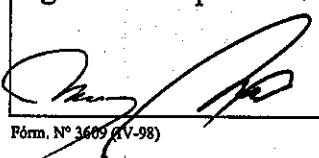
B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 28
----------	--	------------

conducción, ya que, desde luego, la actividad del ente ideal, se desarrolla mediante la actuación de sus dirigentes.

10.4. Con referencia a ello, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala N° 2 en la causa N° 39.014/96 , caratulada **"ESCALA CARLOS ALBERTO Y OTRO C/B.C.R.A. (resol.584/95)"**, **sentencia del 13.07.99**, **ha expresado que comprobadas las irregularidades en el manejo contable de la entidad durante el período en que se verificaron los cargos imputados, cabe endilgar responsabilidad al apelante en razón de su cargo. Ello no puede entenderse como una punición automática, ya que las "personas" o "entidades" (art. 41 de la ley 21.526) saben de antemano que se hallan sujetas al "poder de policía bancario financiero" y es de la naturaleza de la actividad y su importancia económico social lo que se encuentra en la base del grado de rigor con que debe ponderarse el comportamiento de quienes tienen definidas obligaciones e incumbencias en la dirección y fiscalización de las entidades financieras. También ha entendido que así puntualizada la responsabilidad de los directivos no puede confundirse con la responsabilidad objetiva; por acción o por omisión ellos son responsables de las infracciones cometidas por la sociedad representada y dirigida por el Directorio, órgano societario que integran.**

Además, la misma sala se ha expedido expresando que: **"...las infracciones a la Ley de Entidades Financieras, pertenecen a un régimen de policía administrativa, de modo tal que la constatación de su comisión genera la consiguiente responsabilidad y sanción al infractor, salvo que éste invoque y demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (sentencia del 13 de julio de 1982, "Groisman , Salvador y otros c/Resolución N° 114/79 del Banco Central") lo que no se verifica" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, autos : "Galarza, Juan Alberto (Bco.Cooperativo Agrario Arg. Ltda.) - Sumario persona física c/B.C.R.A. s/ resolución 48", sentencia del 1.9.92).**

10.5. Sin perjuicio de los expuesto en los precedentes puntos 10.3 y 10.4 especial tratamiento merece la situación de los incoados con respecto a la comisión de los cargos 2) y 3) en razón de la personal intervención de Francisco Javier TRUSSO en los hechos configurantes del cargo 2) y de Jorge Héctor GRANITTO y Renato DALLE NOGARE en los hechos configurantes del cargo 3), que surgen de las consideraciones vertidas en los puntos 2. y 3. del considerando I. a los que cabe remitirse en honor a la brevedad; personal intervención que debe ser tenida como agravante respecto de cada una de las conductas infraccionales.



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 29 581
----------	--	-------------------

10.6. Que en consecuencia, procede atribuir responsabilidad a los sumariados Jorge Héctor GRANITTO, Francisco Javier TRUSSO y Renato DALLE NOGARE por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 formulados en el presente sumario en razón del deficiente ejercicio de sus funciones directivas, debiendo meritarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar la personal intervención de Francisco Javier TRUSSO en la infracción 2) y de Jorge Héctor GRANITTO y Renato DALLE NOGARE en la infracción 3).

IV - María Elena FALABELLA (Directora, 4.6.86- 20.08.97 -ver fs. 2312 sub.fs.1/3-)

11. Que la prevenida ha sido imputada por todos los cargos del presente sumario (fs.1988/99).

11.1. Que en su defensa (fs. 2035 sub.fs. 1/2) aduce no haber tenido participación en los hechos constitutivos de los cargos imputados. Rechaza toda responsabilidad por acción u omisión y manifiesta que se violan garantías constitucionales por apartarse del principio de personalidad de la pena.

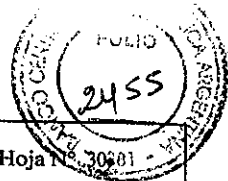
Asimismo alega que no puede considerarse previsible para ella la violación de la ley por parte de otros funcionarios a menos que se le impute algún incumplimiento de sus funciones, y se demuestre en qué medida tal incumplimiento podría evitar la comisión de los hechos objeto de los cargos.(fs. 2035 sub.fs. 5 y 5 vta.)

Formula reserva del caso federal (fs. 2035 sub.fs. 5).

Concluye que de ningún modo las decisiones de los funcionarios que provocaron los hechos que constituyen los cargos imputados han sido previsibles para ella , y que su desconocimiento no puede serle reprochable, pues ha cumplido su función de Directora y como consecuencia del normal cumplimiento de la misma, en ningún momento tuvo indicios de la realización de hechos tales como los que son objeto de imputación (fs. 2035 sub.fs. 5 vta.).

Por el contrario afirma que recababa información sobre el funcionamiento de la entidad. Manifiesta que la primera sospecha de irregularidades la tuvo con la denuncia pública del periodista Jorge Lanata en la noche del 11.8.97. (fs.2035 sub.fs.6).

Luego formula una serie de consideraciones atinentes a la atribución de responsabilidad por culpa leve (art. 59 de la ley de sociedades) y sostiene que el citado artículo establece la regla



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 30801
----------	--	---------------

general de la responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios que resultaren de la acción de aquéllos que faltaren a sus obligaciones . Señala que el art.274 de la ley 19.550, a su vez, establece dos pautas de conducta a las que debe ceñirse la actuación de los administradores : el deber de obrar con lealtad por un lado y con la diligencia de un buen hombre de negocios por otro (fs.2035 sub.fs.6/ vta.).

Indica que los administradores de sociedades anónimas tienen responsabilidad sólo por culpa grave o el art. 274 agrega un supuesto adicional de responsabilidad a los del 59.(fs.2035 sub.fs.6/vta.).

Y en lo que se refiere a la responsabilidad personal de los directores, éstos responderán no sólo de los daños ocasionados "en ejercicio de sus funciones", sino eventualmente aún de los realizados "con ocasión de sus funciones", siempre que se pruebe que actuaron con dolo, abuso de facultades o culpa grave, lo que excluye el caso de culpa leve (1er párrafo in fine art.274 de la Ley 19550) (fs. 2035 sub.fs. 7).

Respecto de la exclusión de responsabilidad (art. 274 Ley 19550 2do párrafo) refiere que la doctrina concuerda en que cuando el Director no ha conocido la deliberación o resolución objeto de disputa, no le cabe responsabilidad por la misma (fs.2035 sub.fs.7).

Manifiesta que la existencia de una investigación penal constituye una cuestión prejudicial en los términos del art. 1101 del Código Civil y que, por lo tanto, no podrá haber resolución en sede administrativa hasta tanto se haya producido una resolución definitiva en sede penal (fs.2035 sub.fs.8 vta.).

Luego, señala que la aplicación de sanciones a la suscripta implicaría una violación al principio de personalidad de la pena que establece que sólo puede ser sancionado aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente, principio de raigambre constitucional que es aplicable no sólo a las cuestiones penales sino también a las sancionatorias . Y que las sanciones establecidas por la ley 21.526 son de naturaleza tal que funcionan como verdaderas penas con un fin retributivo, preventivo y ejemplarizante y no con un criterio reparador, agregando que tales sanciones deben ser conectadas a los principios generales del derecho penal (fs. 2035 sub.fs.9).

11.2.Prueba (fs.2035 sub.fs.9/vta.): Ofrece documental .

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--

11.3. Que corresponde tratar los argumentos defensivos referidos a la atribución de responsabilidad a la imputada FALABELLA en los cargos del presente sumario, señalando que sus afirmaciones acerca de falta de autoría, participación, conocimiento intelectual y material, así como también sus dichos referentes a la desvinculación entre la función ejercida por la sumariada y el ámbito en el que tuvieron lugar los hechos configurantes de los cargos, implican su desconocimiento de que el factor de atribución de responsabilidad por el que se instruye el presente sumario, se sustenta en la dimensión de los deberes que le corresponden. El cúmulo de anomalías ocurridas en el seno del ex-banco que fueron analizadas y acreditadas en el Considerando I, no pueden en forma alguna resultar ajenas al órgano al que pertenecía la prevenida, pues le corresponde al directorio el deber de dirigir y conducir a la sociedad en todos sus aspectos, obligación que se extiende a cada uno de sus directivos.

En efecto, " ... las personas o entidades regidas por la ley de Entidades Financieras conocen de antemano que se hallan sujetas al poder de policía financiero y bancario del Banco Central, y que es la naturaleza de la actividad y su importancia económica- social la que justifica el grado de rigor con que debe ponderarse el comportamiento de quienes tienen definidas obligaciones e incumbencias en la dirección y fiscalización de los entes financieros". (Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re "Hamburgo", sentencia del 8.9.92).

A mayor abundamiento la jurisprudencia ha señalado respecto de los directores de entidades financieras que : "Su responsabilidad es la consecuencia del deber que les incumbe al asumir y aceptar funciones que los habilitan razonablemente para verificar y oponerse a los procedimientos irregulares, sin que las modalidades de la gestión del negocio social puedan excusarlos de sus obligaciones (in re "Pérez Alvarez, Mario A. c/Res. 402/83 B.C.R.A." dictamen del 5.3.86 de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal). Esa responsabilidad se ve comprometida toda vez que se verifican infracciones cuya comisión ha sido posible por su realización deliberada, o por su aceptación, tolerancia o negligencia -aunque sea con un comportamiento omisivo- (doct.Sala II, del mismo fuero en los autos "Galarza" del 1.9.92; y "Crédito Popular Merlo" 3.9.92); salvo que invoquen o demuestren la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida (misma sala in re "Groisman" del 13/7/82), la que aquí no se ha evidenciado.

En la especie la función desempeñada por la sumariada la habilitaba para realizar una razonable verificación y oponerse a los procedimientos irregulares que dieron lugar a los cargos

2457
Hoja N° 32

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 32
----------	--	------------

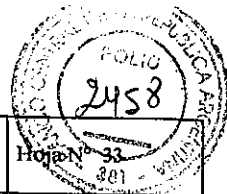
que se le imputan. El desconocimiento de determinadas operatorias, el no tratamiento en reuniones de directorio de cuestiones que luego dieron lugar a los cargos que se analizan no pueden ser eximentes de la responsabilidad de la prevenida.

Con referencia a la ausencia de responsabilidad por la acción de otras personas en la comisión de los hechos infraccionales (directores ejecutivos, directores accionistas) la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, por sentencia de fecha 28.04.77, en autos " VICER S.A.", expresó que *"...La responsabilidad del director de una sociedad nace de la sola circunstancia de integrar el órgano de gobierno cualquiera fueran las funciones que efectivamente cumple"*.

A mayor abundamiento conviene recordar el criterio sustentado por el Tribunal de Alzada que reconoce que *la asignación de responsabilidad no supone necesariamente la autoría material o física de los hechos incriminados, ya que quien acepta un cargo directivo debe responder por actos en los cuales pudo no tener participación directa, pero que por su función debió conocer e impedir su perpetración (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala Contenciosa Administrativa N° 2, fallo Muñiz Barreto, Benjamín J. s/ Recurso c/ Resolución N° 374/74, Banco Central" del 23.11.76)*

11.4. Respecto de que no resultó previsible el accionar violatorio de la ley por parte de otros funcionarios, deviene improcedente por las razones antes apuntadas, resultando forzoso concluir que la encartada no puede omitir un estricto control respecto de la conducción de la sociedad debiendo responder por los resultados de esa gestión. Así, es su deber interiorizarse de la marcha de la entidad financiera, oponiéndose a cualquier acto o conducta que configure el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad financiera.

11.5. En cuanto a su pretensión de eximición de responsabilidad, escudándose en la realización de los controles por parte de la auditoría externa, se indica que no puede la sumariada minimizar el ámbito de la responsabilidad que le cabe por sus funciones directivas, desligándolas en la labor de la auditoría externa, pues como ya se ha dicho en el punto 11.3. y 10.4., su obligación es la de controlar la totalidad de la gestión empresarial. Tampoco resulta válida como excusa, que la entidad haya presentado los balances en el B.C.R.A., pues éste verifica los aspectos formales de los balances y sólo una inspección puede detectar si el balance se adecua a la contabilidad y si ésta se corresponde con los comprobantes. Mucho menos aún puede eximirla que el banco haya realizado distintas operatorias de mercado de capitales con entidades extranjeras,



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 33 801
----------	--	-------------------

pues que éstas hayan efectuado una verificación no garantiza la inexistencia de las irregularidades señaladas por la inspección.

11.6. Resulta sin embargo significativo, tomando los dichos de la imputada, que en la inspección anterior del Banco Central se hayan observado también, incumplimientos en torno a las previsiones de créditos, que la prevenida pretende desvalorizar, aduciendo que la entidad los corrigió posteriormente aumentando el capital en junio del 97, ya que ello es revelador no sólo del inicio de una riesgosa política crediticia sino del inadecuado accionar de sus directivos y también se erige en el reconocimiento implícito de la infracción señalada.

11.7. En cuanto al elemento subjetivo aludido -la culpa- tampoco puede erigirse en causal de exoneración ni admitirse como justificación ya que ha quedado demostrada su actuación en la ex-entidad (ejerciendo el cargo de Directora en el período de ocurrencia de los hechos), de donde su responsabilidad -tal como lo sostiene la jurisprudencia- desencadena las consecuencias previstas por el art. 41 de la Ley 21.526 en tanto se verifique una infracción a las normas vigentes, con prescindencia de los perjuicios materiales que el obrar ilícito pudiera ocasionar y de las formas de culpabilidad que se apliquen para la consumación de las irregularidades (Cfr. fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, sentencia del 30.9.83, causa N° 4105, dictado en autos *"Banco Oberá Coop. Ltda. s/sumario a la entidad y personas físicas c/Resol. 171/82 del Banco Central de la República Argentina"*).

11.8. Con respecto a lo aducido acerca de que entre un hecho punible y su autor deba mediar un hacer culposo, causalmente relevante, y que el injusto le pueda ser reprochable a dicho autor siendo su reverso la responsabilidad objetiva, cabe destacar que carece de relevancia ya que en virtud de las funciones conductivas que asumió la prevenida en una sociedad dedicada a la actividad financiera, esa responsabilidad se encuentra ínsita en la naturaleza de tales funciones (*Conf. jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal; Sala I, sentencia del 18.9.84 en causa 6209 "CONTIN, Hugo Mario Giordano y otros c/Resol. N°99/83 del Banco Central s/Apelación y sentencia del 28.9.84 en causa 2795 "Casa de Cambio Brasilia Mollón S.A.C. y F. c/resol. N° 456/81 del Banco Central de la República Argentina s/apelación art. 41 de la Ley N° 21.526- Banco Ararat", Sala III, sentencia del 3.5.84 en causa B-1209 "Bunge Guerrico, Hugo M. c/Resol. N° 594/77 del Banco Central"; y Sala IV, sentencia del 23.4.85, en causa 6208 "Alvarez, Celso Juan y otros c/Resol. N°166 del Banco Central s/apelación "*).

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.
----------	--

11.9. Que por otra parte, con relación a lo sostenido acerca de la prejudicialidad de la acción penal, debe señalarse que nos hallamos ante una posible concurrencia de delitos con infracciones administrativas -éstas comprobadas en la esfera respectiva-, que admite la contemporánea investigación en jurisdicciones diferentes con el objeto de establecer responsabilidades distintas, de modo que debe tenerse por acreditadas las infracciones, sobre la base de las conclusiones a las que se llega en este sumario administrativo teniendo en cuenta la responsabilidad de los sumariados. Ambos procesos son autónomos, independientes y persiguen distintos objetivos (Marienhoff Miguel S. "Tratado de Derecho Administrativo" pág. 427 in fine y pág. 429); en el presente sumario se encuadran las irregularidades en el derecho administrativo especializado, antes que lo que pueda haber de cercano al derecho penal strictu sensu.

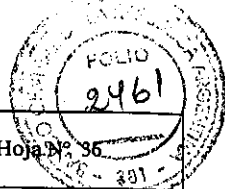
Además tiene dicho la justicia: *"...la jurisdicción administrativa es independiente del juzgamiento en la justicia penal y puede cumplir las directivas legales con prescindencia de que ésta se ejerza efectivamente...de lo que surge que en la especie nos hallamos ante una posible concurrencia de delitos con infracciones administrativas -éstas comprobadas en la esfera respectiva- que admite la contemporánea investigación en jurisdicciones diferentes con el objeto de establecer responsabilidades distintas..."* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, causa N°6210, fallo del 24.4.84, autos "Santana, Vicente y otro c/Resol. N°100 del Banco Central s/apel.-Expte. N°100.619/79 Soc. Coop. General Belgrano").

A mayor abundamiento, se puede citar la siguiente jurisprudencia : *"Las sanciones aplicadas al nombrado no han recaído sobre delitos. El juzgamiento de éstos por la justicia penal es ajena e independiente de la jurisdicción administrativa, limitada a considerar, en el caso la conducta del inculcado desde el punto de vista de la ley de bancos. Por los caracteres que configuran unas y otras transgresiones es forzoso concluir que no concurren los requisitos que determinan la existencia de cosa juzgada ni litispendencia"* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala Contenciosa-Administrativa, fallo del 30.11.67, autos : "Freaza, Julián, Parmigiani, Francisco, Carati, Luis José, s/apelan resolución Banco Central").

A más de lo dicho, corresponde señalar que el art. 1101 del Código Civil no resulta aplicable en la especie ya que se refiere a las acciones que con motivo de obtener la indemnización de los daños causados por los delitos pueden intentarse.



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hojas 3881
<p>11.10. En referencia a la invocada violación del principio de la personalidad de la pena y al elemento subjetivo de las infracciones puede concluirse que distinto es el temperamento incriminatorio a fin de perseguir un hecho delictivo tipificado en el Código Penal de la Nación y los apartamientos normativos de la Ley de Entidades Financieras y sus normas complementarias, donde se evalúan además de conductas concretas, deberes y responsabilidades inherentes a las delicadas funciones que atañen a un cargo ejecutivo de una entidad financiera. En consecuencia no puede pretender morigerarse la responsabilidad administrativa que es evaluada en virtud de los particulares parámetros que la definen.</p> <p><i>Las sanciones en examen tienen carácter disciplinario y no participan de las medidas represivas del Código Penal (Fallos 241:419, 251:343, 268:91, 275:265): las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha, ni del poder ordinario de imponer penas, (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en "Banco Internacional"), y por ende no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal, ni se requiere el dolo, ya que las sanciones se fundan en la mera culpa por acción u omisión (misma Cámara, Sala III "Bunge Guerrico" y "Banco Serrano Coop. Ltda.", del 3.5.84 y 15.10.96 respectivamente).</i></p> <p>11.11. En cuanto a la reserva del caso federal formulado no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.</p> <p>11.12. Sobre el tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de cada uno de los ilícitos, cabe remitirse al análisis y fundamentación realizados en el considerando I, en donde también fueron tratados y rebatidos los argumentos defensivos de la sumariada sobre cada una de las imputaciones, dando por reproducidos los conceptos allí desarrollados.</p> <p>11.13. Prueba: Documental, a.) (fs.2035 sub.fs.9/vta.) : no es admisible en razón de no resultar apta para desvirtuar las probanzas acumuladas en autos, teniendo en cuenta además que las acciones judiciales que pudieran radicarse en distintos fueros son independientes del sumario prescripto por el art. 41 de la Ley 21.526, aunque eventualmente pudieran versar sobre los mismos hechos, pudiendo arribarse a conclusiones diversas, con consecuencias a su vez diferentes, ya que la sustanciación sumarial en lo financiero se circunscribe a responsabilizar por la comisión de hechos que constituyen apartamientos a las conductas impuestas por la Ley de Entidades Financieras y disposiciones reglamentarias de esa actividad. Entonces en razón de hallarse las diversas cuestiones litigiosas sometidas a distintas competencias y jurisdicciones que conllevan específicas y particulares consecuencias jurídicas, carecen estas circunstancias de incidencia alguna en la resolución del presente proceso sumarial, toda vez que este Banco Central es la única</p>		



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 36
----------	--	------------

autoridad legalmente facultada para decidir la apertura del sumario, sustanciarlo y resolverlo; o sea que posee competencia exclusiva en la materia y por lo tanto ninguna autoridad judicial o administrativa puede adoptar decisiones al respecto, salvo la revisión por vía judicial establecida en el art. 42 del cuerpo legal citado (Conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala Contenciosa Administrativa, Fallo del 30.11.67. Autos "Freaza Julián, Parmigiani, Francisco, Carati, Luis José S/ apelación resolución Banco Central" (Publicado en diario La Ley del 17.4.68); Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala N° 3, Causa 3623, "Marfinco S.A. c/Resol. de apelación Res. 73/82 del B.C.R.A.", fallo del 18.9.84 y Sala N° 2, Causa N° 6210, fallo del 24.4.84, autos : "Santana, Vicente y otro c/Resol. N° 100 del Banco Central s/Apel. (expte. N° 100.619/79, Soc. Coop. "General Belgrano"); entre otros).

Con relación a la documental indicada con las letras b), c), d) e) y f) ofrecidas a fs. 2035 sub.fs. 9 vta. : corresponde su rechazo pues las imputaciones formuladas se sustentan con la documentación agregada a las actuaciones, no surgiendo la necesidad de arrimar al sumario otros documentos.

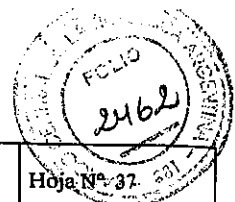
11.14. Que por lo expuesto, se adjudica responsabilidad a la sra. María Elena FALABELLA en virtud del deficiente ejercicio de la función directiva desempeñada, por los hechos constitutivos de los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del presente sumario.

V. Jorge Alejandro DESIMONI (Director 18.11.92- 12.08.97 -ver fs.2311 y 2312 sub.fs.1/3-)

12. Que el prevenido fue imputado por todos los cargos del presente sumario (fs. 1988/99).

12.1. Como previo opone la nulidad de procedimiento fundada en el exiguo plazo de 10 días que se le otorgara para contestar las imputaciones que se le achacan en el presente sumario, lo que dice viola la garantía constitucional de defensa en juicio. Continúa exponiendo que ello no ha hecho más que ahondar el agravio que le produjera el haber tenido que contestar los cargos por el sumario 897, expediente 100.349/97 estando detenido; solicita plazo adicional para presentar su defensa y subsidiariamente ante el rechazo de tal petición, formula descargo (fs.2036 sub.fs. 1 vta.).

12.2. También con carácter previo opone nulidad por consagración de un sistema de responsabilidad objetiva, basándose en que la acusación menciona "hechos" que configurarían presuntas "transgresiones" pero se omite considerar cuáles serían las conductas en que habría



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 37
----------	--	------------

incurrido personalmente para merecer la atribución de responsabilidad que se le formula (fs.2036 sub.fs. 2 y vta.).

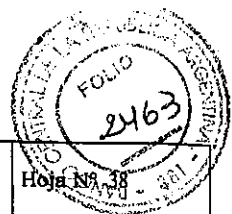
12.3. En su descargo expone que nunca fue accionista de la entidad sumariada y que por esa razón no pudo haber acción ni omisión en sus responsabilidades de Director, fundando lo expresado en la forma de conducción de los directores accionistas y en especial de los Sres. Pablo y Francisco TRUSSO, que actuaban a espaldas de los directores no accionistas. (fs. 2036 sub.fs.3 vta/4).

Niega toda participación en los hechos configurantes del sumario, destaca que desde el año 93 fue director vocal sin ocupar cargos de relevancia ejecutiva, hasta abril de 1996 cuando lo nombran Director Comercial de la Región La Plata, Capital Federal, Gran Buenos Aires, en un plano de igualdad con sus pares Directores Comerciales de Junín y Tandil, los tres dependiendo del Director de Negocios. Este último reportaba a un Comité Ejecutivo integrado por los Sres. Francisco y Pablo Trusso. Destaca que todos los directores sabían de su negativa a aceptar el cargo salvo que se modificaran las políticas y los estilos de conducción vigentes. Agrega que con posterioridad a su renuncia el 12.08.97 se enteró que existía un organigrama con fecha mayo/97, en que se lo coloca como Director Comercial de todo el Banco y aclara que no firmó el citado instrumento (fs. 2036 sub.fs.4 vta./5).

Expresa que la inspección fue manejada por los directores accionistas, que los hechos que dan lugar al sumario acaecieron en 45 o 60 días, período en el que no hubo reuniones de directorio y en el que las máximas autoridades nada informaron. Niega haber recibido informes de las gerencias de contabilidad, sindicatura, auditoría externa o interna que lo alertaran de la irregularidades que dieron lugar al presente sumario (fs. 2036 sub.fs.5 vta./6/7).

Agrega que tampoco pudo conocer la situación de las carteras de préstamos que eran manejadas por el área administrativa (fs. 2036 sub.fs 4 vta.).

12.4. En referencia a la nulidad de procedimiento fundada en el exiguo plazo otorgado para contestar los cargos que se le formularon, corresponde indicar que el término y su improrrogabilidad ha sido dispuesto por las normas procesales que rigen la materia (Comunicación "A" 2762 Circular RUNOR 1- 296, Cap. XVII, puntos 1.2.2.2.2. y 1.2.2.7.2.) que tiene fundamento legal en el propio art. 41 de la Ley 21.526 que dispone que el sumario "...se instruirá



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 38
----------	--	------------

con audiencia de los imputados con sujeción a las normas de procedimiento que establezca la indicada institución", por lo que corresponde desestimar in limine la nulidad impetrada.

12.5. Con respecto a la nulidad articulada por "la consagración de un sistema de responsabilidad objetiva", se impone señalar que los argumentos invocados por el Sr. DESIMONI carecen de toda entidad y virtualidad impugnatoria para poder afectar la validez de la Resolución que dispuso la instrucción sumarial y el informe de cargos en que se sustenta.

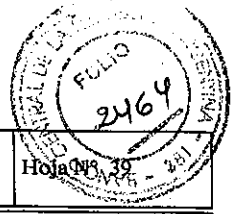
En efecto, no sólo del Informe de fs. 1988/2001 sino también de la resolución de apertura sumarial (fs.2002/3) surge que cada una de las transgresiones imputadas lo ha sido describiendo los hechos configurantes, disposiciones violadas y el material acreditante de ellas.

En lo que hace a las personas imputadas entre las que se encuentra el prevenido, se ha aclarado con respecto a cada una de ellas los datos identificatorios y los cargos y hechos constitutivos que se les imputó, destacándose con respecto a los otros sumariados, en cada caso la circunstancia calificante respecto de los cargos 2) y 3) (fs.1944, 1987 sub.fs.95, 1998/9,2003 y 2312 sub.fs. 1/3).

En efecto, al prevenido se le han dirigido siete imputaciones concretas respecto de hechos acaecidos en la entidad financiera y en razón de haber tenido el inculcado el manejo de ese ente ideal; por lo cual, presumiblemente, ha ejercido sus deberes de conducción de la actividad de la sociedad que dirigiera y por ende se presume que ha estado involucrado en los hechos ocurridos.

De modo que el acto acusatorio tuvo suficiente especificidad para llevar adelante la pretensión punitiva.

12.6. Con respecto al tipo de responsabilidad que se arguye se aplicaría en este sumario, procede remitir a lo expuesto en los anteriores puntos 10.4. y 11.3. y señalar que la jurisprudencia ha sostenido "...No se trata de la aplicación del principio de la responsabilidad objetiva. Las infracciones han sido cometidas por el ente social y la conducta de éste no es más que la resultante de la acción de unos y de la omisión de otros dentro de sus órganos representativos..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, Fallo del 23.4.85, Causa N° 6.208, Autos "Alvarez, Celso Juan y otros c/Resolución N° 166 del Banco Central s/apelación (expte. 101.167/80 Coop. Sáenz Peña de Crédito Ltda.)



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 39
----------	--	------------

En virtud de las razones expuestas no se observan elementos en las actuaciones que pudieran generar la nulidad impetrada por el prevenido, por lo cual debe ser desestimada.

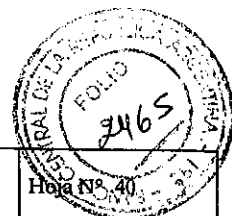
12.7. En relación a la alegada falta de participación del Sr. DESIMONI en los hechos configurantes de los cargos bajo análisis, fundada en que el mismo no revestía la calidad de accionista de la entidad, que su función era eminentemente comercial, alejada de las áreas de administración y limitada, o que no contaba con los informes suficientes, se destaca que el argumento no reviste entidad suficiente para exonerar su responsabilidad en los mismos. Ello así, por cuanto su actuación en la entidad se funda en el rol de Director que el susodicho aceptó desempeñar. A mayor abundamiento corresponde remitirse, en honor a la brevedad, a los párrafos 11.3. y 11.7. donde fuera tratado el tema y vertida la jurisprudencia aplicable.

12.8. Con referencia a la ausencia de responsabilidad por la acción de otras personas en la comisión de los hechos infraccionales resulta de aplicación la jurisprudencia citada en el punto 11.3. dictada por la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala D, en autos VICER S.A. y por la C.N.Com., Sala B, sentencia del 10.11.78 autos "Co -crédito Coop. de Crédito" J.A., 1979-IV, Sint.).

Tampoco resulta eximente el organigrama presentado a fs. 2036 sub.fs.10 pues de él no surge que el prevenido no haya aceptado la función consignada. Mucho menos lo exime de responsabilidad la existencia del Comité Ejecutivo, pues el art. 269 de la Ley de Sociedades Comerciales establece que "esta organización no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores". En cuanto su renuncia, presentada el 12 de Agosto de 1997, se señala que se produjo pocos días antes de la suspensión de la entidad, por lo que resulta tardía a la luz de los hechos en examen para relevarlo de la responsabilidad que le compete por la función desempeñada.

12.9. Sobre el tratamiento de la cuestión de fondo y la acreditación de cada uno de los ilícitos, cabe remitirse al análisis y fundamentación realizados en el considerando I, dando por reproducidos los conceptos allí desarrollados.

En lo atinente a la pretendida eximición de responsabilidad por el cargo 7, atento la fecha de su configuración, no procede acoger la misma, pues la apertura de la sucursal sin autorización se produce tres días antes de la desvinculación del prevenido.



B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Folio 2465 Hoja N° 40
----------	--	--	--------------------------

12.10 Prueba: procede rechazar la testimonial ofrecida a fs. 2036, sub.fs.4 por no haber acompañado el pliego a tenor del cual depondrían los testigos propuestos cuya exigencia se halla dispuesta por las normas procesales propias de la Institución (Comunicación "A" 2762 Circular Runor I-296, Capítulo XVII, punto 1.2.2.8.2.).

12.11. En virtud de lo expuesto en los puntos 12.4. a 12.9. corresponde responsabilizar al Sr. Jorge Alejandro DESIMONI a raíz del deficiente ejercicio de su función de dirección por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y7; debiendo meritarse su menor período de actuación por los cargos 2, 4, 5 y 7.

VI. Pablo Alfredo TRUSSO (Director Ejecutivo, 10.10.89-20.08.97 -ver fs. 2312 sub.fs. 1/3-)

13. Que el citado fue imputado por todos los cargos (fs.1988/99).

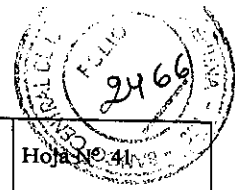
13.1. Que la firma inserta en su descargo (fs.2037 sub.fs.1/7) no es de puño y letra del imputado sino una mera fotocopia. Que en atención a ello y a que el prevenido no tomó vista de las actuaciones se le cursaron las notificaciones de fs. 2038, 2042, 2060 y 2315 en las que se le intimaba a comparecer a ratificar su descargo o en su defecto hacerlo por escrito con certificación de firma por escribano público. La última de las misivas se cursó bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de tener por no presentada la defensa.

El prevenido no compareció a estar a derecho. No obstante esta circunstancia y con el fin de asegurar el derecho de defensa en juicio del imputado se procede a analizar los argumentos de distinta índole formulados respecto de los cargos que se le imputan. (fs. 2037 sub.fs 1/7).

Los relativos a la existencia de los hechos infraccionales y su ilicitud han sido rebatidas en oportunidad de analizar los siete cargos en el considerando I, razón por el cual es procedente remitirse a lo expuesto en los puntos 1 a 7 del citado considerando.

En cuanto al aspecto de su responsabilidad personal niega respecto de cada uno de los cargos, que le sean imputables los hechos que configuraron las infracciones reprochadas. Niega también haber tenido participación en los mismos.

Ofrece prueba: informativa y testimonial (fs. 2037 sub.fs.6 y vta.).



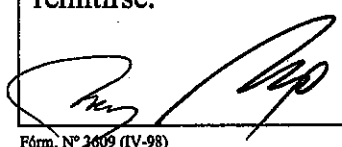
B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 41
----------	--	------------

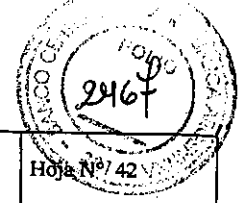
13.2. Que la función de director de una sociedad anónima es personal e indelegable; aún cuando en la práctica delegue las distintas funciones específicas de la actividad financiera no puede omitir un estricto control respecto de ellas, además de resaltar que en el caso el imputado ostentaba la calidad de director ejecutivo, y como tal tiene encomendada por la ley la conducción de la sociedad debiendo responder por los resultados de esa gestión. Así, es su deber no sólo dirigir el banco de acuerdo a las normas del ente rector sino que también debe interiorizarse de la marcha de la entidad, oponiéndose a cualquier acto o conducta que configure el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad financiera.

En tal sentido se ha expedido la jurisprudencia de alzada cuando dijo: *"... el director está legalmente habilitado para realizar una razonable verificación y vigilancia de los actos de la sociedad, quedando comprometido por las faltas cometidas por ésta, no sólo cuando haya tomado decisiones al respecto, sino también cuando incurra en un incumplimiento de sus deberes, sea tolerando los hechos acaecidos u omitiendo sus obligaciones de control "* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, sentencia del 14.07.92, causa N° 24772 autos "BANCO VICENTE LOPEZ COOP. LIMITADO (en liquidación) c/ B.C.R.A s/apelación Resolución N° 283/90").

Jurisprudencia conteste con la vertida en el párrafo anterior ha sido la dictada por los siguientes tribunales de alzada : Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, Sentencia del 18.9.94 en causa 6209 "CONTIN, Hugo Mario Giordano y otros c/Resol. N° 99/83 del Banco Central s/apelación" y sentencia del 28.9.84 en causa 2795 "Casa de Cambio Brasilia Mollón S.A.C. y F. c/ Resol 456/81 del Banco Central. Instrucción de Sumario a la Entidad y a las Personas Físicas"; Sala II, sentencia 6.12.84 en autos BERBERIAN , Carlos Jacobo y otros c /Resol 477 del B.C.R.A. s/apelación art. 41 de la Ley N° 21.526- Banco Ararat"; Sala III, sentencia del 3.5.84 en causa B-1209 "Bunge Guerrico,Hugo M. c/Resol.N°594/77 del Banco Central" ; y Sala IV, sentencia del 23.4.85, en causa 6208 "Alvarez, Celso Juan y otros c/Resol. N° 166 del Banco Central s/apelación".

13.3. No obstante lo expuesto en el punto precedente, especial tratamiento merece la situación del incoado con respecto a la comisión del cargo 2), destacando sobre este particular que su personal intervención en la configuración de la anomalía debe ser considerada como agravante de su conducta infraccional, de acuerdo con lo expuesto en el punto 2 . b) al que corresponde remitirse.





B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 42
----------	--	------------

13.4. Prueba: 1) Informativa : (fs.2037 sub.fs. 6 y vta.) corresponde rechazar la ofrecida en el primer párrafo teniendo en cuenta que la materia de estos actuados está constituida por hechos infraccionales de carácter administrativo, y que al respecto la jurisprudencia ha dejado sentado que *"...aparte de reiterar que media sustancial diferencia entre la responsabilidad penal y la administrativa surgida de los mismos hechos, lo que autoriza un diferente juzgamiento por dos jurisdicciones diferentes, en el caso de autos se discute la realización de una actividad que resulta violatoria de las disposiciones que rigen el sistema financiero, en tanto que el proceso (judicial) se imputa a los procesados la comisión de delitos, como el de estafas reiteradas, en los cuales la entidad financiera pudo haber servido de móvil para su perpetración...La decisión en sede penal para nada puede menguar la legitimidad del acto administrativo sancionador, desde que la responsabilidad administrativa tiene por finalidad la observancia de las normas que hacen al exacto cumplimiento de la actividad financiera. El ejercicio de la potestad sancionadora es administración y el de la potestad criminal es justicia..."* (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 4, in re "Alvarez, Celso Juan y otros c/Resol. N°166 del Banco Central s/apelación - Expte. N° 101.167/80 Coop. Sáenz Peña de Créd. Ltda., fallo del 23.4.83, causa N° 6208). *"Las sanciones aplicadas al nombrado han recaído sobre delitos. El juzgamiento de éstos por la justicia penal es ajena e independiente de la jurisdicción administrativa, limitada a considerar, en el caso, la conducta del inculcado desde el punto de vista de la ley de bancos. Por los caracteres que configuran unas y otras transgresiones es forzoso concluir que no concurren los requisitos que determinan la existencia de cosa juzgada ni litispendencia."* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso administrativo, Sala Contenciosa- Administrativa, fallo del 30.11.67, autos "Freaza, Julián, Parmigiani, Francisco, Carati, Luis José, s/apel. Res. Banco Central").

En el mismo sentido y a mayor abundamiento, *"...la jurisdicción administrativa es independiente del juzgamiento en la justicia penal y puede cumplir las directivas legales con prescindencia de que ésta se ejerza efectivamente...de lo que surge que en la especie nos hallamos ante una posible concurrencia de delitos con infracciones administrativas -éstas comprobadas en la esfera respectiva- que admite la contemporánea investigación en jurisdicciones diferentes con el objeto de establecer responsabilidades distintas..."* (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, causa N° 6210, fallo del 24.4.84 en autos "Santana, Vicente y otro c/Resol. N°100 del Banco Central s/apel.- Expte. N° 100.619/79 Soc. Coop. Gral. Belgrano").

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 43
----------	--	------------

En relación a la informativa solicitada en el segundo párrafo de fs. 2037 sub.fs. 6 (agregación de la prueba producida en la investigación del Sumario 897, Expediente N° 100.349/97) corresponde señalar que resulta de imposible cumplimiento pues en el sumario referido no se ha producido prueba alguna. No obstante lo expuesto se han agregado y forman parte del presente (fs.2061/2311) las fotocopias de las actas de reuniones de directorio que fueran incorporadas oportunamente por el apoderado del Sr. Luciano FIORONI al citado sumario N° 897 . También se agregó fotocopia certificada del descargo presentado y documentación que acompañara el Sr. Pablo Alfredo TRUSSO en el sumario referido (fs. 2316/49).

Con referencia a la informativa solicitada en el párrafo tercero de fs. 2037 sub.fs. 6 y vta. corresponde señalar que no se advierte relación entre los informes solicitados y los hechos que configuraron la materia de las infracciones analizadas en el presente sumario , por lo que corresponde su rechazo.

2)Testimonial: (fs.2037 sub.fs.6 vta.) procede su rechazo pues el prevenido no ha acompañado a su descargo el interrogatorio a tenor del cual deberían deponer los testigos propuestos, cuya exigencia se halla dispuesta por las normas procesales propias de la Institución (Comunicación "A" 2762, Circular Runor.1- 296, Capítulo XVII, pto.1.2.2.8.2.)

13.5. Que en consecuencia procede endilgar responsabilidad al Sr. Pablo Alfredo TRUSSO, por los cargos 1, 2 , 3, 4, 5, 6 y 7 en razón del deficiente ejercicio de sus funciones directivas, debiendo meritarse a los efectos de la graduación de la sanción a aplicar su personal intervención en la comisión de la infracción 2 . tal como se concluyera en el Considerando I, punto 2 b).

VII. Mario Alberto BACIGALUP VÉRTIZ y Mario Gustavo BACIGALUP VÉRTIZ (Miembros del Consejo de Vigilancia, 27.8.87- 20.08.97-ver fs. 2312 sub.fs. 1/3-)

14. Que los prevenidos han sido imputados por todos los cargos y en el carácter aludido en el título (fs. 1988/99). Que a su vez han presentado un sólo descargo (fs.2034 sub.fs.1/10) por lo que corresponde efectuar un tratamiento conjunto. Que en cuanto a las consideraciones vertidas en el mismo sobre la existencia de los hechos infraccionales y su ilicitud corresponde remitirse al Considerando I, puntos 1 a 7 en donde fueran analizadas y rebatidas. A su vez dicho descargo coincide en la mayoría de sus argumentos defensivos de índole general con el de la directora Sra. FALABELLA (fs.2035sub.fs.1/10), los que han sido analizados y rebatidos en el considerando IV, al que corresponde remitirse en honor a la brevedad.

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 44
----------	--	------------

14.1. En cuanto a la responsabilidad por la función desempeñada por los imputados corresponde señalar que ésta es más abarcativa aún que la de la sindicatura a la que comunmente se ha asimilado. Según lo establece la Ley de Sociedades en su artículo 281, los miembros del Consejo de Vigilancia deben fiscalizar la gestión del directorio. Y en tal sentido pueden examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar arqueos de caja, por sí o por peritos que ellos mismos designen, recabar informes sobre contratos celebrados o en trámite de celebración, convocar a asamblea cuando lo estimen conveniente, o lo requieran los accionistas, aprobar -según el estatuto- determinados actos del directorio, los que sin su aprobación no podrán celebrarse, designar directores sujetos a aprobación de la asamblea, presentar sus observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables sometidos a consideración de la misma, etc, como así también les cabe las demás facultades y funciones atribuidas por la ley 19.550 a los síndicos.

En concordancia con lo expuesto nuestra jurisprudencia al efecto de discernir las diferencias entre la función del síndico y del consejo de vigilancia ha expresado: *" El ámbito funcional del Consejo de Vigilancia resulta ser más extenso que el de la sindicatura, y su responsabilidad no menor que la de los directores" (CN Com., Sala C, febrero 3-984. Fer-Metal, S.A. s/quiebra) La Ley 1985-A, 296 - DJ, 984 -4-115- I, 985 -A,888 -ED,108-417. "A diferencia del consejo de vigilancia, a cuya obligación básica de fiscalizar la gestión del directorio, desde un punto de vista contable se añade la función de control dado en llamar de gestión empresarial (consistente en emitir un juicio de valor sobre su eficacia), a la sindicatura sólo compete -desde la perspectiva a que obliga la cuestión en estudio- la tarea indicada en primer término, sin perjuicio de los demás deberes impuestos. Es decir que se le ha encomendado un control prevalementemente formal de la administración ".(C.N.Com., Sala B, mayo 14-980 Caselli de Merli, Cliene c. Szpayzer, Benjamín),ED, 94-635. " El ocultamiento de bienes y el recurrir al crédito disimulando el estado de cesación de pagos deben ser observados concretamente por el Consejo de Vigilancia, así como del mismo modo, las anomalías contables no se pueden ocultar al conocimiento de los mismos, lo cual lleva a considerarlos incursos en la causal del inc. 11, art. 235, pues su responsabilidad surge de los arts. 281, inc. a) y g), 296, inc. 1° y 297 de la ley 19.550 (ADLA, XXXII-B,1760) (C.N.Com., Sala C, febrero 3-984 Fer-Metal S.A. s/quiebra, La Ley, 1985-A-296).*

En consecuencia la labor del consejo de vigilancia se ciñe a la verificación, fiscalización y contralor del órgano de dirección, desde un punto de vista totalizador de la gestión contable-administrativa y de la gestión empresarial, lo que conduce a endilgarles responsabilidad por los cargos formulados. *" El consejo de vigilancia debe comprobar que los órganos sociales*

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 45
----------	--	------------

den debido cumplimiento a la ley, estatutos y decisiones de asambleas lo que importa un control de legalidad y legitimidad que en el caso específico debe extenderse a los requisitos impuestos por la Ley de Entidades Financieras y sus normas complementarias, ya que sus funciones no se limitan a salvaguardar el patrimonio de la entidad sino que deben constituirse en garantía de una correcta gestión y tutela del interés público" (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, sentencias del 10.5.84, causa 3258, "Banco Credicoop Ltda. Sumario a la entidad y personas físicas c/Resolución N° 661/81 Banco Central").

"Las funciones que establece la ley respecto de la sindicatura, tienden -a más de salvaguardar el patrimonio de la sociedad- a constituir garantía de una correcta gestión y a tutelar el interés público" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, in re "Bunge Guerrico", del 3.5.84 y "Banco Internacional" del 5.7.84). "Las atribuciones que enumera el art. 294 de la Ley de Sociedades importan para aquél la obligación de ejercerlas a fin de asegurar el buen desempeño de la fiscalización que le ha sido encomendada; así deberá vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatutos, reglamentos y decisiones asamblearias (conf.inc.9-art. citado), lo que importa el control de legitimidad , que como en el caso debe extenderse a los requisitos derivados de la ley de entidades financieras y sus normas complementarias . Para el mejor cumplimiento puede asistir a las reuniones de directorio ... e informarse aún de los hechos acaecidos en ejercicios anteriores a su elección (conf. art. 295 Ley de Sociedades) . Es decir que a tenor de las normas citadas resulta atribuido a la Sindicatura no sólo un control en el sentido estricto al que aluden los recurrentes, sino también, una vigilancia que va mucho más allá de las meras verificaciones contables y una responsabilidad condigna (id. arts. 296 y 297...") Sentencia del 4.7.86 causa 7129, "Perez Alvarez Mario A. c/Resolución N° 402/83 del Banco Central", Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal . La jurisprudencia ha profundizado aún más estos conceptos en el fallo dictado por al Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal , Sala I, del 8.11.93 en el expediente 24.773, autos "Caja de Crédito Flores Sud Sociedad Cooperativa (en liquidación) c/B.C.R.A. s/apelación Resolución 279/90 : "...el síndico es responsable por omisión de todas las irregularidades comprobadas al no haber efectuado los controles exigidos por las disposiciones vigentes, como así también por no haber obrado con la diligencia debida en las amplias facultades de vigilancia que la ley le atribuye (Arts. 294, inc. 1° y 9°, 297 y 298 de la Ley 19.550)".

La jurisprudencia en materia societaria, también ha resuelto que los síndicos *"...son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad, son más*



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja Nº 46
----------	--	------------

importantes individualmente que las de cada uno de los directores y la falta deliberada o no, del debido ejercicio de sus múltiples obligaciones los hace incurrir en gravísima falta que debe ser sancionada".(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, 12.3.84, Mackinnon y Coelho Ltda. Cía. Yerbatera S.A.); similares conceptos fueron vertidos por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, en sentencia del 4.04.89 dictada en la causa N° 18.316, autos "LABAL S.A. CIA. FINANCIERA S/APELACION RESOLUCION B.C.R.A., Considerando VIII." *

Del correcto desempeño de la función de vigilancia ha expresado la jurisprudencia : "***los miembros de la comisión fiscalizadora cumplen con sus deberes si ponen en conocimiento del órgano de control las irregularidades observadas y luego comprobadas por éste y la imposibilidad de ponerles remedio por los cauces institucionales internos***". (Conf. Sala IV, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, causa " Pam S.A. Compañía Financiera en liquidación ", sentencia del 31.5.82 y " Ficsa S.A. Compañía Financiera c/B.C.R.A. s/apelación" , 14.7.94).

Es de destacar la especificidad del caso que nos ocupa, pues la actividad financiera es un sector en el que resultan comprometidos altos intereses públicos y privados que conllevan a extremar la vigilancia que debió haberse efectuado en el BANCO CREDITO PROVINCIAL por parte de su órgano de fiscalización, dadas las características de su operatoria. En tal sentido, cabe recordar las expresiones de la jurisprudencia : "***...una entidad financiera no es un comercio como cualquier otro en el cual solo importa el interés particular del empresario en su búsqueda de mayor ganancia. En esta actividad se encuentra presente el interés público en tanto las entidades financieras a través de ella resultan ser una fuente creadora de dinero...***" (Causa N° 6208 "Alvarez Celso Juan y otros s/Resol. N° 166 del B.C.R.A. s/apelación Expte N° 101.167/80, Cooperativa Sáenz Peña de Crédito Ltda., Sala 4, fallo del 23.4.85).

Que en cuanto a la alegada falta de participación en los hechos que constituyen los cargos que se imputan, corresponde indicar además , que no basta para eximir de responsabilidad a los integrantes de los órganos de control que, aún sin actuar materialmente en los hechos, no desempeñaron su cometido de dirigir y fiscalizar la actividad desarrollada por los directores y coadyuvaron de ese modo, por omisión no justificable, a que se configuren los comportamientos irregulares. Además esa responsabilidad disciplinaria, no requiere siquiera la existencia de un daño concreto derivado de ese comportamiento irregular, y con menor razón aún de un beneficio

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 47
----------	--	------------

económico. (Conf. Sala III, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re "Foinco Compañía Financiera S.A. c/ B.C.R.A.", 17.8.95).

Que, conteste con el razonamiento vertido en el párrafo que antecede, y en referencia a la calificación de conducta de los administradores en la quiebra también se ha establecido : *"La responsabilidad del órgano de fiscalización -fuere la sindicatura o consejo de vigilancia- aparece delineada más por omisión, que por acción , dada la modalidad de sus funciones, que son preponderantemente de contralor, de modo que difícilmente se les podría imputar actos positivos, sino más bien un "no hacer" (CNCom., sala C, febrero 3-984 - Fer-Metal s/quiebra)DJ, 984-4-115 ED, 108-417).*

14.2. Con relación al caso federal planteado, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

14.3. Prueba: Documental a.) (fs.2034 sub.fs.9/vta.) : no es admisible en razón de no resultar apta para desvirtuar las probanzas acumuladas en autos. Además, corresponde su rechazo por las fundamentaciones vertidas en el punto 11.13 al que corresponde remitirse en honor a la brevedad.

Con relación a la documental indicada con las letras b) , c), d) e) y f) ofrecidas a fs. 2034 sub.fs. 9 vta. : corresponde su rechazo pues las imputaciones formuladas se sustentan con la documentación agregada a las actuaciones, no surgiendo la necesidad de arrimar al sumario otros documentos que se observan ajenos a los hechos que se investigan en estos actuados.

Respecto de la documental señalada con la letra g) (sumario N° 897) corresponde su rechazo toda vez que los cargos formulados en el presente sumario se refieren a hechos diferentes de los analizados en el sumario N° 897 y por otra parte la acreditación de los ilícitos y la atribución de responsabilidad a los imputados en ningún caso podrán resolverse -en aras de la garantía de defensa en juicio - con otros fundamentos que no se sustenten en el material constitutivo del presente sumario, por lo que no tiene objeto la agregación peticionada.

14.4. En virtud de lo expuesto, corresponde atribuir responsabilidad a los Sres. Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ y Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ -cuyos nombres completos surgen de fs. 1987 sub.fs. 95- por los cargos 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 y 7 en razón del deficiente ejercicio de sus funciones de fiscalización .

B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	2433 Hoja N° 48
----------	--	--	--------------------

VIII. Luis Nicolás BETTI (Consejero Titular, 15.12.82- 20.08.97 ver fs. 2312 sub.fs. 1/3)

15. Que el prevenido cuyo nombre completo es el que figura en el título, tal como surge de fs. 2350 fue imputado por todos los cargos (fs.1988/99).

15.1. Que a fs. 2020 y 2045 obran agregadas constancias de la recepción de las notificaciones cursadas al prevenido (fs. 2012). A pesar de ello el imputado no se presentó a estar a derecho, por lo que se lo citó mediante la publicación de edictos (fs.2053), sin que el prevenido tomara vista ni presentara defensa.

Que en consecuencia, su conducta será analizada a la luz de las constancias obrantes en autos, y las que oportunamente aportara el inculcado en el desarrollo del sumario N° 897 que tramitara por Expediente N° 100.349/97, sin que su inactividad importe presunción alguna en su contra.

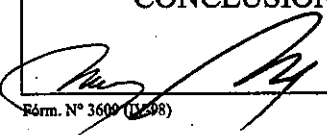
Que en el sumariado citado en el párrafo anterior el prevenido acreditó que su período de actuación se redujo por una internación debido a cuestiones de salud, acaecida entre el 5.8.97 y el 11.8.97, (fs. 2350/9) lo que debe considerarse válido en estos actuados atento a que el período infraccional de los hechos del presente sumario abarca dichas fechas, y que el presente es una ampliación del sumario N° 897 (fs.1988).

15.2. Que en cuanto a la comprobación de las imputaciones en sí debe estarse a lo desarrollado en el considerando I en sus puntos 1 a 7 en dónde fueran analizados los cargos y la acreditación de los mismos.

15.3. Que las imputaciones de autos se efectúan por la función de fiscalización desempeñada por el prevenido por lo que corresponde remitirse a las consideraciones efectuadas en el punto 14.1.

15.4. Que en consecuencia corresponde atribuir responsabilidad al Sr. Luis Nicolás BETTI por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en razón del deficiente ejercicio de su función fiscalizadora debiendo meritarse a los efectos de la sanción a aplicar su menor período de actuación en virtud de lo expuesto en el precedente punto 15.1.

IX- Luciano FIORONI (Director, 17.12.91- 20.08.97 -ver fs. 2312 sub.fs. 1/3)

B.C.R.A.		Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	2474 Hoja N° 39
<p>16. Que el prevenido fue imputado por su función de director por todas las infracciones (fs. 1988/ 99). Sin embargo en su descargo (fs. 2044 sub.fs. 1/33) manifiesta que nunca aceptó el cargo conferido y que tiene su domicilio real en la ciudad de Perugia, Italia, lugar en donde recibiera la notificación de la Resolución de apertura del presente sumario (fs.2043 -"aviso de recibo de entrega", en el domicilio de Vía Pievaiola 11-06127-), circunstancia también acreditada con las constancias del poder obrante a fs. 2044 sub.fs. 34/6. Señala que la responsabilidad sólo puede caberle a aquellas personas que al momento de los hechos se desempeñaban como integrantes de los órganos de administración (fs.2044 sub.fs. 1/2).</p> <p>Luego describe cómo ha sido el origen y el desarrollo de su relación -en calidad de accionista - con el Banco Crédito Provincial . Con posterioridad, relata que el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 15 del Departamento Judicial de La Plata, tuvo en la causa N° 21.836 por acreditados una cantidad de hechos ilícitos cometidos por los directores del Banco Crédito Provincial, luego querrellados por FIORONI atento el perjuicio que dice le han ocasionado (fs.2044 sub.fs. 2 vta./11 vta.).</p> <p>Reseña de la causa penal aquellos hechos comprobados que tienen relación con los cargos del presente sumario (fs.2044 Sub.fs.12/21).</p> <p>16.1. Las consideraciones reseñadas en el punto anterior se corroboran con la fotocopias certificadas del Libro de Actas de Reuniones de Directorio correspondientes al período de actuación del Sr. FIORONI, que constan a fs.2061/2309 de esta actuación.</p> <p>De ellas se desprende que el imputado no suscribió ninguna de las actas del período infraccional de este sumario . Además de ello, se acreditó que el Sr. FIORONI reside en el exterior, pues ha recibido la notificación de la resolución de apertura del expediente referenciado y de las presentes actuaciones en su domicilio sito en Perugia, Italia, el que fuera consignado en el listado de fs.1987 sub.fs.95. Todo unido a la falta de otras evidencias en autos que demuestren que el señor FIORONI aceptó la designación como miembro del Directorio, permiten confirmar su condición de ajeno a la entidad sumariada y a las infracciones que le son reprochadas.</p> <p>16.2. En virtud de lo expresado en el punto anterior corresponde absolver al Sr. Luciano FIORONI de los cargos 1, 2 , 3, 4, 5. 6 y 7 del presente sumario</p> <p>CONCLUSIONES:</p> <p></p> <p>Fórm. N° 3600 (12/98)</p>			

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 50
----------	--	------------

17. Que por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas -físicas y jurídica- halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 21.526, según el texto vigente introducido por la Ley 24.144, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias y formas de su participación en los ilícitos.

17.1. Atento la gravedad de alguno de los hechos configurantes de las infracciones es procedente sancionar con la pena prevista en los incisos 3) (multa) y 5) (inhabilitación para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la ley 21.526) del citado artículo 41 a los señores María Elena FALABELLA, Pablo Alfredo TRUSSO, Francisco Javier TRUSSO, Renato DALLE NOGARE, Jorge Héctor GRANITTO, Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ, Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ, Jorge Alejandro DESIMONI y Luis Nicolas BETTI halladas responsables de los hechos acaecidos.

17.2. En cuanto a la sanción que establece el inciso 3) del mencionado artículo 41, según el texto vigente introducido por la Ley 24.144, para la graduación de la multa se tienen en cuenta los factores de ponderación prescriptos en el tercer párrafo de dicho artículo, reglamentado mediante Resolución de Directorio N° 231 del 15.5.93, publicada en el Boletín Oficial de fecha 6.8.93 (Comunicación "A" 2124) y aclarada en el Boletín Oficial de fecha 27.9.93, -vigente al momento de los hechos- cuya evaluación, emanada del Informe Nro. 553/41/98 (fs.1963 sub.fs.203/5), determinan que la magnitud de la infracción 1. importa la suma de \$ 90.931.000, la magnitud de la irregularidad 2. fue de \$ 30.000.000, la magnitud de la infracción 3. asciende a la suma de \$ 1.500.000 y la magnitud de la infracción 6. \$ 1.083.000. Con respecto a las anomalías 4, 5 y 7 cuyas magnitudes no son susceptibles de ser mensuradas en dinero, se considera la importancia de las disposiciones transgredidas en cada caso y las demás pautas de ponderación exigidas en el punto 2.1.b) 1) de la Resolución de Directorio citada, que fueron determinadas en los puntos 4, 5 y 7 del Considerando I.

17.3. En cuanto el perjuicio originado a terceros, el citado Informe 553/41/98 especifica que las distintas irregularidades detectadas en la ex-Entidad hicieron que su patrimonio resulte negativo, por lo cual se afectó y perjudicó considerablemente no sólo los derechos de los depositantes sino también los de las entidades financieras locales y del exterior, y demás acreedores del ex-BANCO CREDITO PROVINCIAL que deberán sufrir el perjuicio originado por la insuficiencia del activo de la ex-entidad para cubrir pasivos asumidos por ella, arrojando un total al



B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 51
----------	--	------------

31.5.97 de \$ 448.636.000 (fs. 1963 sub.fs. 205), no pudiendo determinarse el perjuicio respecto de cada uno de los cargos en particular.

17.4. A los efectos establecidos en el punto 3.3. c) de la citada reglamentación, la responsabilidad patrimonial computable de la entidad a la época infraccional es de \$ 79.323.000 (fs. 2313/4), por lo que el monto máximo posible de la multa factible de aplicar, se limitará al 20% de la mayor responsabilidad patrimonial computable declarada por la entidad a la época infraccional, por lo que no podrá exceder de \$ 15.864.600. También se han considerado las sanciones impuestas a los mismos imputados en el Expediente N° 100.349/97 que tramitó por Sumario N°897 seguido al ex-Banco Crédito Provincial, del que el presente es una ampliación (ver fs.1988) por lo que sólo resulta legalmente admisible completar el tope pecuniario arriba aludido.

17.5. Que el Area de Estudios y Dictámenes Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Por ello,

**EL SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS
RESUELVE:**

1º) Rechazar la nulidad interpuesta por el señor Jorge Alejandro DESIMONI por las razones desarrolladas en el Considerando V, puntos 12.4 , 12.5. y 12.6.

2º) Rechazar la prueba ofrecida por la señora María Elena FALABELLA, documental: a) 1), 2), 3), 5), 6), y 7) ; b), c), d), e) y f) (fs.2035 sub.fs.9 y vta.) ; por el señor Jorge Alejandro DESIMONI: Testimonial a fs. 2036 sub.fs. 4; por el señor Pablo Alfredo TRUSSO: IV.1. Informativa (fs.2037 sub.fs.6), IV.3) Testimonial (fs.2037 sub.fs.6 vta.), y por los señores Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ , Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ : documental, a) 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), b), c), d), e), f), en virtud de las razones expuestas en los Considerandos IV, punto 11.13., VI, punto 13.4. y VII punto 14.3.

3º) Imponer las siguientes sanciones en los términos del artículo 41 -incisos 3 y 5- de la Ley N° 21.526, según el texto vigente introducido por la Ley 24.144 y modificatorias :

-Al Ex-BANCO CREDITO PROVINCIAL S.A.: multa de \$ 3.000.000 (pesos tres millones)

Fórm. N° 3609 (IV-98)

2477

B.C.R.A.	Referencia Expte. N° 100.562/97 Act.	Hoja N° 52
----------	--	------------

- Al señor Pablo Alfredo TRUSSO multa de \$ 6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente.

- Al señor Francisco Javier TRUSSO multa de \$ 6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente.

- Al señor Renato DALLE NOGARE multa de \$ 6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente.

- Al señor Jorge Héctor GRANITTO multa de \$ 6.000.000 (pesos seis millones) e inhabilitación permanente.

A la señora María Elena FALABELLA multa de \$ 3.000.000 (pesos tres millones) e inhabilitación permanente.

- Al señor Mario Alberto BACIGALUP VERTIZ multa de \$ 3.000.000 (pesos tres millones) e inhabilitación permanente.

- Al señor Mario Gustavo BACIGALUP VERTIZ multa de \$ 3.000.000 (pesos tres millones) e inhabilitación permanente.

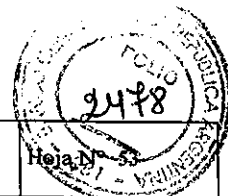
- Al señor Luis Nicolás BETTI multa de \$ 2.740.000 (pesos dos millones setecientos cuarenta mil) e inhabilitación por 25 (veinticinco) años.

- Al Señor Jorge Alejandro DESIMONI multa de \$ 2.700.000 (pesos dos millones setecientos mil) inhabilitación por 24 (veinticuatro) años.

4°) Las inhabilitaciones impuestas en el precedente punto quedan subsumidas -sin unificarse- con las aplicadas a las mismas personas por Resolución N° 312 del Señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias de fecha 3.9.99 dictada en el Sumario N° 897 que tramitara en Expediente N° 100.349/97.

5°) Absolver al Señor Luciano FIORONI

6°) El importe de las multas mencionadas en el punto 3°) deberá ser depositado en este Banco Central en "Cuentas Transitorias Pasivas -Multas- Ley de Entidades Financieras - Artículo



B.C.R.A.

Referencia
Expte. N° 100.562/97
Act.

Hoja N° 53

41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley N° 21.526.

7º) Dése oportuna cuenta de la presente Resolución al Directorio.

8º) Notifíquese.

GUILLERMO L. LESNIEWER
SUPERINTENDENTE DE
ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS

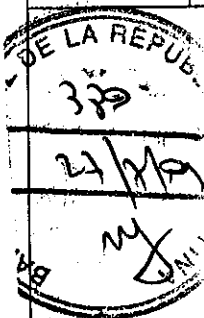
40-11

B.C.R.A.

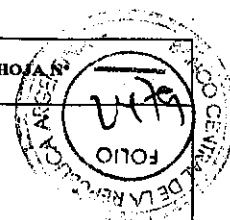
Referencia

Exp. N°
Act.

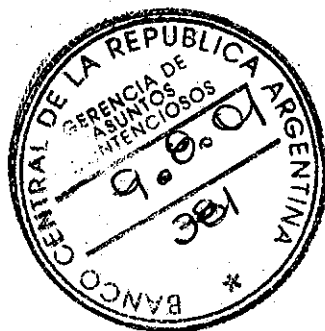
HOJA N°



Pase a la Gerencia de Asuntos Contenciosos a sus efectos.



[Signature]
JUAN CARLOS BARALE
A/C SUBGERENCIA GENERAL DE
CUMPLIMIENTO Y CONTROL



Registrado. Pase al Sector
Administrativo a efectos de
que notifique la Resolución
N° 195/01 en la forma de
estilo. Previamente, tome nota
la Sr. Sene en sus registros
Asuntos Contenciosos
09.08.01

[Signature]
SONIA M. PERCIAVALLE
ANALISTA PRINCIPAL DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS EN LO FINANCIERO
GERENCIA DE ASUNTOS
CONTENCIOSOS